11

Diálogos locales

Con grupos armados en medio de la violencia

Colección Papeles de paz

11

Colección Papeles de paz

Diálogos locales

Con grupos armados en medio de la violencia

Colección Papeles de paz

Diálogos locales

Con grupos armados en medio de la violencia

©Centro de Investigación y Educación Popular/ Programa por la Paz (CINEP/PPP)

Director general
Luis Guillermo Guerrero Guevara

Subdirector
Sergio Coronado Delgado

Coordinador equipo Ciudadanía y Paz
Fernando Sarmiento Santander

© Conciliation Resources

Director ejecutivo
Andy Carl

Directora de Políticas y Prácticas
Eleanor O'Gorman

Director de Accord
Alexander Ramsbotham

Director del Programa Transiciones a la Paz (Colombia y Filipinas)
Kristian Herbolzheimer

Oficial de Programa
Felix Colchester

Editoras
Sophie Haspeslagh
Zahbia Yousuf

Producción editorial

Coordinación editorial
Margareth Figueroa Garzón

Traducción
Rosario Casas

Diagramación
Alexander Mora

Impresión
Por definir

CINEP/ Programa por la Paz
Carrera 5 n.° 33B - 02
PBX: (57-1) 2456181
Bogotá, D.C., Colombia
cinep@cinep.org.co
www.cinep.org.co

Conciliation Resources
Burghley Yard, 106 Burghley Road,
London NW5 1AL
Tel: +44 (0)20 7359 7228
Fax: +44 (0)20 7359 4081
cr@c-r.org
www.c-r.org

Mayo de 2016
ISBN impreso: 978-958-644-209-1

Bogotá, D.C., Colombia
Impreso en Colombia / Printed in Colombia

Título original: Accord Insight 2: Local engagement with armed groups: in the midst of violence.
© Conciliation Resources, UK, 2015

La publicación original fue posible con el apoyo financiero del Ministerio de Asuntos Exteriores de Finlandia, el Centro Noruego de Recursos de Construcción de Paz (NOREF) y el Ministerio de Asuntos Exteriores del Gobierno de Noruega.

La publicación de esta traducción es posible gracias al apoyo de la Agencia Española de Cooperación (AECID) y de la Fundación Humanismo y Democracia (H+D), como material complementario del programa de formación de organizaciones sociales en la construcción de paz.

El contenido de dicha publicación es responsabilidad exclusiva del CINEP/PPP y no refleja necesariamente la opinión de la AECID.

El contenido de esta edición puede ser utilizado total o parcialmente siempre y cuando se notifique y se cite como fuente al CINEP/ Programa por la Paz y a Conciliation Resources.

Contenido

Presentación de la edición en español 7

Presentación 9

ACCORD INSIGHT

En medio de la violencia: diálogos locales con grupos armados 13

ANÁLISIS EXPERTO

Entre el combate y el diálogo 21

ESTUDIOS DE CASO

Norte de Uganda: La Iniciativa de Paz de los Líderes Religiosos Acholi: mediación local con el Ejército de Resistencia del Señor 31

Colombia: Desminado en Micoahumado: de la resistencia civil a la negociación local con el ELN 43

Irlanda del Norte: De la violencia punitiva a la justicia restaurativa en Irlanda del Norte 53

Siria: La interacción entre civiles y grupos armados en el conflicto sirio 59

Textos clave 66

Lecturas adicionales 67

Sitios web clave 70

Siglas

>>

ARLPI	Iniciativa de Paz de los Líderes Religiosos Acholi
AUC	Autodefensas Unidas de Colombia
BCB	Bloque Central Bolívar
RCA	República Centroafricana
CINEP/PPP	Centro de Investigación y Educación Popular/ Programa por la Paz
CPA	Acuerdo de Paz Integral
RDC	República Democrática del Congo
ELN	Ejército de Liberación Nacional
FARC	Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
FSA	Ejército Sirio Libre
GoSS	Gobierno de Sudán del Sur
HSM	Movimiento del Espíritu Santo
IRA	Ejército Republicano Irlandés
ISIS	Estado Islámico
JN	Jabhat al-Nusra
LAC	Consejo(s) Administrativo(s) Local(es)
LCC	Comité(s) de Coordinación Local
LRA	Ejército de Resistencia del Señor
NGO	Organización(es) no gubernamental(es)
NIACRO	Asociación para la Atención y Reinserción de Agresores de Irlanda del Norte
NRA	Ejército de Resistencia Nacional
PDPMM	Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio
PSNI	Servicio de Policía de Irlanda del Norte
RUC	Gendarmería Real del Ulster
UNSC	Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas
UPDF	Fuerza de Defensa del Pueblo de Uganda
UPDM/A	Movimiento/Ejército Democrático del Pueblo de Uganda

Presentación de la edición en español

>>

Conciliation Resources, editora de la revista *Accord*, y el Centro de Investigación y Educación Popular/ Programa por la Paz (CINEP/PPP) tienen una larga experiencia en analizar y documentar conflictos armados, además de implicarse directamente en la ardua tarea de la construcción de paz. Fruto de esta experiencia y en coherencia con los principios que las orientan, la construcción de paz se concibe, esencialmente, como un proceso de diálogo para superar las diferencias a través de las palabras en lugar de las armas. Un diálogo que necesariamente implica a personas con visiones políticas diametralmente opuestas, pero también al conjunto de la sociedad que sufre el conflicto y, sobre todo, a las comunidades más afectadas directamente.

Esta publicación es la traducción al español de un documento *Accord Insight 2*, publicado en inglés por Conciliation Resources en mayo de 2015[1]. La publicación resalta el papel —muchas veces anónimo— que juegan las personas civiles en crear las condiciones para reducir el impacto de la guerra y, con mayor frecuencia que la imaginada, promover diálogos de paz a pequeña escala; justo allí, viviendo en la primera línea de los frentes de batalla. En un contexto global, donde el diálogo con grupos armados es con frecuencia estigmatizado, la realidad es que las comunidades en zonas de guerra están en permanente contacto con organizaciones armadas, ya sea por connivencia, por necesidad de supervivencia o por la suma de ambas.

A partir de cuatro estudios casos de cuatro continentes diferentes, esta publicación ofrece un innovador análisis comparado que permite entender la diversidad de condiciones y circunstancias e identificar el valor de estos diálogos entre comunidades de base y los grupos armados.

Esta publicación llega a Colombia en un momento en el que precisamente el país está pasando por un proceso de profunda transformación de imaginarios frente a los actores de la guerra. Las negociaciones de paz entre el gobierno nacional y las FARC-EP han supuesto un cambio de paradigma —de la guerra a la paz— difícil de digerir para un sector importante de la opinión pública que considera a la insurgencia básicamente como una organización criminal.

Sin embargo, la mejor garantía para la no repetición de la guerra después de la firma del acuerdo de paz es que la transición de la insurgencia —de organización armada a movimiento social y político que respeta las reglas del marco democrático— sea lo más fluida y exitosa posible. El propio Estado, que hasta ayer prohibía el diálogo con

1 La versión original (en inglés) de este documento puede ser consultada en http://www.c-r.org/accord/engaging-armed-groups-insight

la insurgencia, ahora necesita trazar una hoja de ruta para normalizar la interacción entre la guerrilla y el conjunto de la sociedad.

Esta normalización será gradual; su primera fase han sido las negociaciones en La Habana. En un segundo momento se traducirán en una mayor interacción entre la guerrilla y las comunidades en las zonas rurales de reincorporación. Y, en una tercera fase, las FARC-EP deberán poder llevar a cabo actividades políticas en todo el territorio nacional.

Estamos hablando de un proceso complejo, cuya velocidad dependerá de las confianzas que se vayan construyendo entre gobierno, guerrilla y sociedad. El país tendrá que reconocer la existencia de comunidades de base de la insurgencia, que se sienten protegidas por la presencia de la misma. Al mismo tiempo la guerrilla demostrará su talante democrático en la medida en que reconozca, respete y dialogue con las voces críticas que puede haber en los mismos territorios o en otros circundantes.

Será en la escala local donde se podrá medir la salud del proceso de paz. El avance del mismo dependerá de que la población pueda expresar libremente su opinión frente a la insurgencia, frente al Estado o frente a cualquier otro actor sin temor a coacciones y represalias. Y también dependerá del reconocimiento que reciban las comunidades locales como agentes de construcción de paz. En otras palabras, la solidez del proceso de paz depende de la normalización de las relaciones entre las comunidades, la guerrilla y las instituciones del Estado.

La publicación que aquí se presenta ofrece elementos en esta perspectiva, esperando que ello sea una contribución clave para el actual momento que vive Colombia.

Kristian Herbolzheimer
Director del Programa Transiciones a la Paz (Colombia y Filipinas) Conciliation Resourse
kherbolzheimer@c-r.org

Fernando Sarmiento Santander
Coordinador del Equipo Ciudadanía y Paz CINEP/ Programa por la Paz
fsarmiento@cinep.org.co

Presentación

>>

Por Michael Semple[2]

Los pioneros de las conversaciones de paz con los grupos armados provienen con frecuencia de comunidades afectadas por la violencia. El presente *Accord Insight*, en el cual se exploran iniciativas de diálogo locales, es un oportuno recordatorio de que la transformación de conflictos se da a menudo sin un mandato presidencial o la mediación de un antiguo diplomático internacional. Los procesos formales y aquellos de nivel nacional tienen mucho que aprender de las experiencias de los líderes tribales, los líderes religiosos o los activistas de la sociedad civil que se han sentado a conversar con los grupos armados locales.

En mi experiencia, el cubrimiento mediático de los conflictos casi siempre presenta a las poblaciones civiles como desempoderadas y a merced de los grupos armados. En el caso de Pakistán, suelen citarse estimativos del número de líderes tribales asesinados por los talibanes o miembros de Al-Qaeda para demostrar la forma en que los militantes han subvertido las estructuras tradicionales de autoridad, tales como las *jirgas*. No obstante, tengo entendido que tanto en Pakistán como en Afganistán hay una interacción intensa entre los grupos armados y personajes de la comunidad, motivada en parte por el hecho de que los militantes han reconocido que su supervivencia depende de que mantengan un cierto grado de consentimiento popular.

Las comunidades dialogan con los grupos armados sobre diversos asuntos que van desde la negociación en casos de toma de rehenes a la justicia penal, la resolución de disputas y los acuerdos locales de cese al fuego. El grado de protagonismo de los interlocutores civiles también varía. Los representantes pueden exponer las exigencias de la comunidad ante los grupos armados. En Pakistán y Afganistán abundan los actores informales, entre ellos líderes religiosos y líderes tribales, dispuestos a actuar como intermediarios para la recuperación de rehenes o la concertación de treguas. En aquellas regiones en las que el grupo armado funge como autoridad de facto, gran parte del diálogo consiste en peticiones por parte de los civiles que se dirigen al comandante del grupo armado debido a que el comisionado asistente aprobado por el gobierno ya no está en capacidad de responder a las necesidades.

La importancia otorgada por los talibanes al diálogo con los civiles se ve ilustrada en su programas de capacitación de cuadros, que en los últimos años han enfatizado cada vez más las relaciones corteses y no coercitivas con la población civil. Es posible que el comportamiento real de esos cuadros varíe, pero la intención de los talibanes

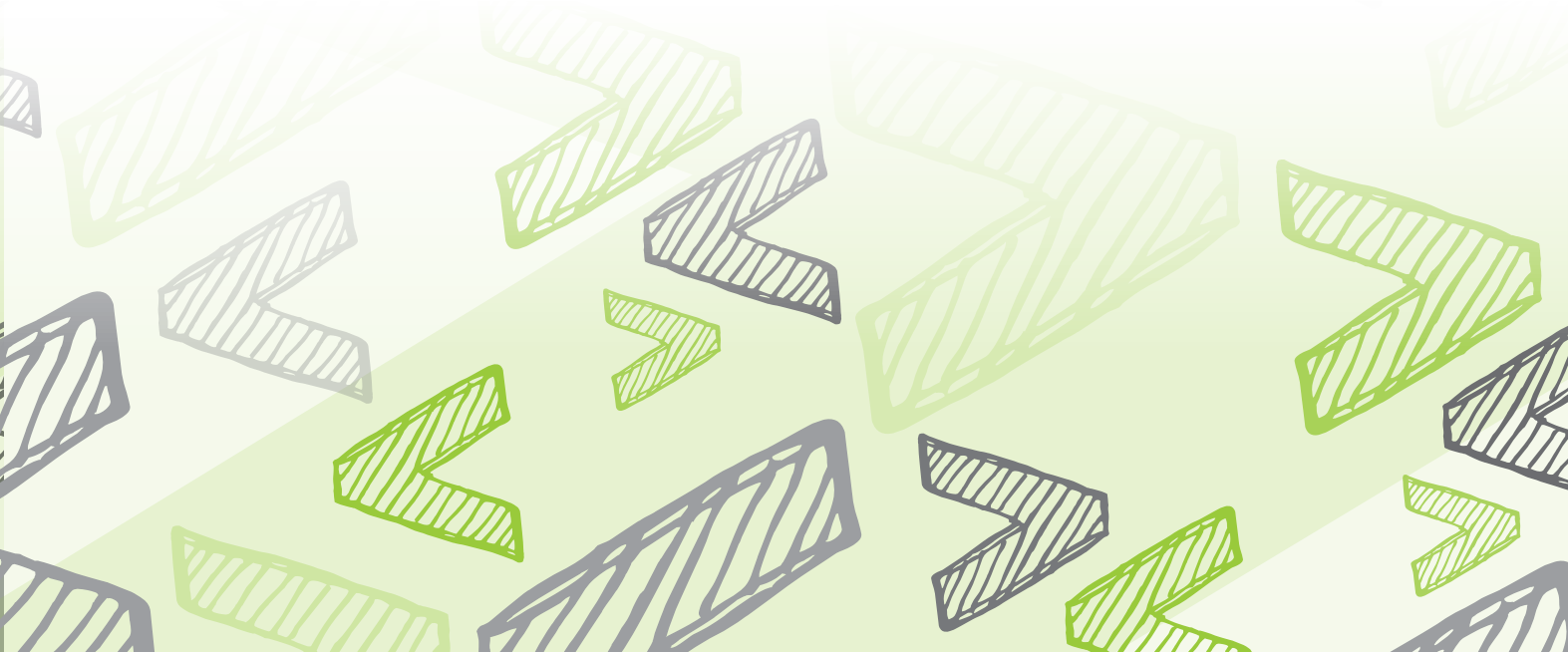
2 Michael Semple es profesor visitante del Institute for the Study of Conflict Transformation and Social Justice (Instituto para el Estudio de la Transformación del Conflicto y la Justicia Social) de la Universidad Queen's de Belfast. Se especializa en investigación, políticas y práctica de la asistencia humanitaria y resolución de conflictos en Afganistán y Pakistán, región donde trabajó entre 1988 y 2008. Fue miembro del equipo político de las Naciones Unidas que ayudó a implementar el Acuerdo de Bonn de 2001. De 2004 a 2008 fue Representante Especial Adjunto de la Unión Europea para Afganistán. Michael es un reconocido analista del Movimiento Talibán Afgano y actualmente investiga los retos que enfrentan los grupos militantes yihadistas que desarrollan un papel político.

es lo suficientemente clara —reconocer que la capacidad para operar con seguridad en las áreas rurales depende de poder mantener un mínimo de consentimiento por parte de la comunidad—. Por el contrario, los talibanes afganos perciben a las *arbakai* (milicias comunitarias apoyadas por el gobierno) como la mayor amenaza a su influencia. Dichas milicias surgen cuando los talibanes fracasan en su intento por conseguir el consentimiento respecto de su presencia. Los grupos armados saben bien que las disputas con las comunidades puede significar la derrota en la guerra.

Desde 2010 ha habido intentos periódicos por orquestar conversaciones oficiales de paz con los talibanes afganos. A comienzos de 2015 se dio el intento más concertado hasta el momento, cuando, según el cálculo estratégico del presidente Ashraf Ghani, el acercamiento de alto nivel con Pakistán, complementado por la mediación china, podría llevar a los líderes talibanes a la mesa de negociaciones. La iniciativa comenzó como un ejemplo clásico de construcción de paz de arriba hacia abajo, que dependía del poder de persuasión de los actores estatales para dialogar con los líderes talibanes.

Este Accord Insight destaca enfoques alternativos en los cuales las comunidades dialogan con los actores armados en su área de operaciones e influyen sobre ellos. Al tener en cuenta la participación de las organizaciones sociales de base en diversos contextos, el Accord Insight llama la atención de manera particularmente útil sobre la riqueza de la experiencia de tratar con los grupos armados.

Se espera que esta nueva información ayude a abordar el problema del sesgo de verticalidad de arriba hacia abajo que ha caracterizado la construcción de paz oficial y cree espacios para enfoques complementarios a múltiples niveles. Las experiencias documentadas poseen relevancia internacional para quienes estén desarrollando estrategias encaminadas a involucrar a los grupos armados en un proceso de paz. Es posible que los constructores de paz afganos adopten el enfoque de abajo hacia arriba si encuentran que las conversaciones de alto nivel no producen el tipo de avance que se buscaba.



1.

Accord Insight

En medio de la violencia: diálogos locales con grupos armados

>>

Por ZahbiaYousuf [3]

Esta segunda publicación *Insight* de la serie *Accord* de Conciliation Resources adopta un enfoque que va más allá de los debates centrados en el Estado y aquellos internacionales sobre si se debe o no dialogar con los grupos armados. Se dedica, más bien, a explorar los espacios en los que los grupos armados operan y sus relaciones con las poblaciones que los habitan.

Las poblaciones locales no son meros actores pasivos, simplemente coaccionados por los actores armados en las zonas de conflicto. Y los grupos armados no se dedican únicamente a explotar o abusar de las comunidades que habitan las áreas en las que ellos operan. Tres estudios de caso pormenorizados de Colombia, el norte de Uganda y Siria, así como una reflexión más breve sobre Irlanda del Norte, ilustran la manera en que las comunidades han tratado de orientar el comportamiento de los grupos armados hacia acciones no violentas, y los factores que han afectado sus interacciones; la mayor parte de las cuales ocurrieron antes de que se produjeran las negociaciones formales y, con frecuencia, en situaciones de intensa violencia y conflicto arraigado.

"Las poblaciones locales no son meros actores pasivos, simplemente coaccionados por los actores armados en las zonas de conflicto. Y los grupos armados no se dedican únicamente a explotar o abusar de las comunidades que habitan las áreas en las que ellos operan."

Estos "espacios locales intermedios", ubicados entre la lucha y el diálogo, arrojan luces sobre las posibilidades de diálogo con los grupos armados, orientados más de abajo hacia arriba, y la variedad de esfuerzos de paz que contribuyen a determinar sus decisiones. Los estudios de caso demuestran que acercarse a los grupos armados no implica legitimar ni sus tácticas ni sus aspiraciones. También ilustran la forma en que el diálogo activo con los grupos armados por parte de la comunidad puede aportar de manera significativa a la seguridad humana y a la construcción de paz a nivel local.

Las experiencias documentadas confirman que los actores de paz locales enfrentan graves riesgos de seguridad, sin la protección de la inmunidad diplomática o la seguridad del Estado. A menudo, los grupos armados muestran un irrespeto flagrante por la seguridad de la población civil, o peor aún, atacan deliberadamente a la población. Dichas poblaciones locales también están expuestas a amenazas de seguridad por parte del Estado, que suele considerar a las comunidades que se relacionan con los grupos armados como sus cómplices.

3 ZahbiaYousuf se unió al equipo de Conciliation Resources como Editora y Analista de Construcción de Paz en mayo de 2012. Anteriormente se desempeñaba como Profesora de Violencia, Conflicto y Desarrollo en la Universidad SOAS y en King's College en Londres. También ha sido Investigadora Asociada de INCORE en la Universidad de Ulster y el Instituto Alemán de Investigación Económica (DIW), Berlín. Obtuvo su Doctorado en Procesos de Paz Comparados en 2010, con un estudio sobre Irlanda del Norte, Israel/Palestina y Cachemira, y tiene una Maestría en Paz y Seguridad Internacional del Departamento de Estudios de Guerra, King's College Londres.

El contacto activo de una comunidad con un grupo armado corre el riesgo de exacerbar las percepciones de asociación con este último.

En épocas de combate intenso, es posible que los esfuerzos locales por reducir la violencia y promover el diálogo sean vistos como contrarios a los esfuerzos realizados por las partes en conflicto para lograr una ventaja militar. Los actores locales hacen grandes esfuerzos por mantenerse tanto imparciales como seguros. Es importante mantener este espacio para proteger a quienes pueden y efectivamente entran en contacto con los grupos armados con el fin de contrarrestar la violencia.

Los estudios de caso que presentamos aquí son apenas una instantánea de las relaciones complejas y a veces ambiguas entre las poblaciones locales y los grupos armados; las comunidades pueden ser víctimas, aliadas, parientes, manifestantes o canales de diálogo respecto de los actores armados.

No obstante, se espera que estos estudios de caso contribuyan a la discusión e indagación sobre una gama más amplia de opciones constructivas para entrar en contacto con los grupos armados en aras de fomentar la paz, y que subrayen las experiencias de aquellas personas que enfrentan a diario el reto y el riesgo de convivir con los grupos armados y que cuestionan su recurso a la violencia.

Nuevas perspectivas sobre la construcción de paz a partir del diálogo local con los grupos armados

El diálogo entre las comunidades y los grupos armados puede abrir puertas para la construcción de paz cuando las vías más convencionales se hallan bloqueadas, al:

- Mantener y sustentar el contacto con los grupos armados cuando nadie más lo hace.
- Brindar apoyo práctico a la transición de un grupo armado de la violencia a la no violencia.
- Arraigar el diálogo con los grupos armados en esfuerzos más amplios por fomentar el cambio social.

Las estrategias comunitarias para acercarse a los grupos armados echan mano de las instituciones y de los sistemas locales existentes, entre ellos:

- Construir sobre los vínculos preexistentes con los grupos armados, tales como el parentesco y la ideología compartida.
- Desarrollar y fortalecer las estructuras para la movilización y la organización no violenta.
- Enmarcar las discusiones dentro de las normas culturales y sociales locales.

Los actores locales enfrentan riesgos considerables al dialogar con los grupos armados y por ello desarrollan técnicas para reducir dichos riesgos, como, por ejemplo:

- Vincularse a redes externas y estructuras de apoyo.
- Afirmar su imparcialidad.

El diálogo entre las comunidades y los grupos armados puede abrir puertas para la construcción de paz cuando las vías más convencionales se hallan bloqueadas

En los estudios de caso incluidos en esta publicación, el motivo principal que llevó a las poblaciones locales a entrar en contacto con los actores armados fue la seguridad; protegerse del ataque. Otras razones inmediatas incluyen asegurar el acceso a las carreteras y otros recursos humanitarios. En Micoahumado, Colombia, las comunidades estaban en riesgo por el fuego cruzado entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las fuerzas paramilitares. Las poblaciones locales atrapadas en medio de la guerra intensa y caótica en Siria buscaban ponerle fin a los asedios impuestos por el régimen. En el norte de Uganda, las comunidades enfrentaban la amenaza de la violencia extrema así como el secuestro y el reclutamiento forzado de sus niños para el Ejército de Resistencia del Señor (LRA).

Tal como lo ilustra el estudio de caso de Siria, es posible que sea difícil influenciar en el corto plazo a los grupos armados, especialmente a aquellos que carecían de vínculos preexistentes con las poblaciones locales, debido a que las tácticas violentas y las prioridades estratégicas abruman y silencian las voces a favor de la paz. Aun así, muchas de las iniciativas documentadas en este Accord Insight comenzaron como esfuerzos tendientes a mejorar la seguridad humana local y luego desarrollaron ambiciones más amplias. En el norte de Uganda los actores comunitarios reconocieron explícitamente que proteger a las poblaciones locales de la violencia requería de esfuerzos de paz de más largo plazo, es decir, que el LRA dialogara con el gobierno. En otros casos, la transición hacia la construcción de paz fue menos deliberada y se desarrolló como resultado de los enfoques específicos que se adoptaron.

Mantener y sustentar el contacto con los grupos armados cuando nadie más lo hace

Los actores locales pueden brindar atisbos cruciales respecto de los grupos armados, así como vínculos con ellos cuando las partes en conflicto carecen de voluntad de negociar y cuando no parece haber aperturas discernibles para una mediación más formal. Mediante el contacto directo, los actores locales en los contextos de cada uno de los estudios de caso pudieron conocer la estructura y las prioridades de los grupos armados respectivos. Por ende, pueden servir de barómetros para determinar el momento en que esos grupos podrían estar listos para las conversaciones formales, así como para comprender los obstáculos.

También es probable que los actores locales tengan una visión de largo plazo respecto del diálogo, lo cual podría contrastar con la participación internacional, que tiende a darle prioridad a la entrega de resultados demostrables dentro de cronogramas específicos. Cuando estalla la violencia, es posible que los actores locales suspendan temporalmente el diálogo directo con un grupo armado, pero pueden mantener un contacto reducido y seguir listos para retomar el diálogo cuando lo permitan las circunstancias. En el norte de Uganda, los líderes tradicionales siguieron transmitiendo mensajes al LRA en los períodos de combate intenso entre este grupo y las Fuerzas de Defensa del Pueblo de Uganda (UPDF) cuando los ataques a la población civil se intensificaron particularmente.

Apoyo práctico a la transición de un grupo armado de la violencia a la no violencia

Existen retos reales y prácticos para que los grupos armados cesen la violencia e inicien negociaciones. Los grupos comunitarios pueden brindar un espacio de confianza en el que los grupos armados pongan a prueba nuevas ideas u objeten las existentes. También pueden crear las condiciones tendientes a fomentar el cambio pacífico dentro de un grupo armado y apoyar y facilitar la transición de un grupo de la violencia a la no violencia.

En Irlanda del Norte, las discusiones sobre la justicia restaurativa entre el Ejército Republicano Irlandés (IRA) y la sociedad civil local se desarrollaron paralelamente a las conversaciones formales de paz. El IRA había comprendido que sus actividades punitivas —palizas y tiroteos para imponer el orden en las comunidades— no concordaban con sus ambiciones políticas y su

compromiso con el cese al fuego. El reconocimiento de esta discrepancia incentivó el interés del IRA en otras alternativas. Las conversaciones con la sociedad civil proporcionaron marcos conceptuales, consejos prácticos y capacitación sobre enfoques distintos. También abrieron espacios para que el movimiento republicano repensara la seguridad comunitaria y el papel de los servicios estatales de policía, y abordara al asunto clave de la reforma policial en las conversaciones de paz emergentes.

En el norte de Uganda, el diálogo de las comunidades con el LRA identificó preocupaciones respecto de la reintegración. El trabajo por la paz de la Iniciativa de Paz de los Líderes Religiosos Acholi (ARLPI) fomentó la comprensión por parte de la comunidad de que muchos miembros del LRA eran víctimas del secuestro, a menudo desde niños, por parte del grupo. Las comunidades se sensibilizaron respecto del potencial retorno de combatientes del LRA, lo cual abrió una posible vía para la desmovilización. El trabajo de la ARLPI con la comunidad brindó incentivos para que los combatientes retornaran a su comunidades sin temor al rechazo, y promovieron así la reinserción del LRA.

Arraigar el diálogo con los grupos armados en esfuerzos más amplios por fomentar el cambio social

Los actores locales tienen un interés fundamental en el resultado de los diálogos con los grupos armados, que con frecuencia reflejan las aspiraciones de la comunidad respecto del logro de un cambio social más amplio. Tanto en el norte de Uganda como en Micoahumado, los activistas comunitarios observaron que la movilización y la organización a favor de la paz fortaleció y promovió el protagonismo de comunidades temerosas que enfrentaban la violencia severa y la inseguridad, y las alentó a creer en la posibilidad de paz y a trabajar por ella. En Siria esto ha sido fundamental dado que las dinámicas del conflicto han aplastado la posibilidad de negociaciones formales de paz.

Los estudios de caso de Accord Insight demuestran que los actores locales participaron en una serie de actividades que contribuyeron a la posibilidad de una paz sostenible, entre ellas: el retorno y la reinserción de los combatientes, la seguridad comunitaria y el desminado, el abordaje de los efectos de la violencia en la sociedad, la incidencia política a favor de la paz ante actores nacionales e internacionales, y los esfuerzos por concientizar a los grupos armados para que tengan en cuenta las prioridades de los pobladores. En el norte de Uganda, la ARLPI ofrece terapia de superación de traumas a los afectados por la violencia y ha mediado en conflictos localizados, tales como las disputas por la tierra.

En Colombia, quienes participaron en la iniciativa de desminado de Micoahumado han compartido las lecciones con otras comunidades y ONG nacionales, lo cual ha generado aprendizaje y movilización nacional en torno al tema. El desminado se ha convertido también en un punto clave de negociación en las conversaciones entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), y es probable que figure en la agenda de las conversaciones con el ELN.

Las estrategias comunitarias para acercarse a los grupos armados echan mano de las instituciones y los sistemas locales existentes

El conflicto desbarata el tejido social. Por ejemplo, tal como lo identifica el caso de Siria, el alzarse en armas puede darle a quienes se han sentido marginados en la sociedad la oportunidad de ejercer el poder y desafiar las expectativas y estructuras sociales y culturales. En cada uno de los estudios de caso discutidos en esta publicación, los altos niveles de violencia (tanto estatal como no estatal) redefinieron la vida social, las prácticas culturales, las actividades rutinarias y el espacio público y personal.

Por lo tanto, para las comunidades locales que forman parte del contexto de conflicto, el diálogo con los grupos armados implica retos diferentes a los que enfrentan los actores externos. Es posible que ya existan el acceso a y las relaciones con los grupos armados, inclusive a nivel de comandancia, pero la capacidad de influenciar requiere de un protagonismo mucho más activo que conlleva la adaptación de las redes existentes y el desarrollo de formas innovadoras de convencer a los actores armados.

Construir sobre los vínculos preexistentes con los grupos armados, tales como el parentesco y la ideología compartida

En Micoahumado y en ciertas partes de Siria, las comunidades dependían de las relaciones preexistentes de parentesco y los lazos familiares para lograr que los grupos armados dialogaran. Algunos líderes religiosos de la ARLPI no tenían vínculos étnicos con el LRA, pero los contactos iniciales se hicieron a través de líderes tradicionales que tenían más conexiones históricas con ellos.

Muchos de los grupos armados, al menos al comienzo, contaban también con el apoyo a sus objetivos, por ejemplo, el de su oposición al Estado. En Siria, las fuerzas de autodefensa surgieron con frecuencia en áreas de levantamientos populares masivos en contra del régimen de Assad. En las fases tempranas del conflicto, las relaciones entre los elementos armados y no armados semejaban la división del trabajo en torno a principios revolucionarios compartidos.

Es clave que los actores locales comprendan las aspiraciones de un grupo armado y se identifiquen con ellas para poder influenciarlo: establecer confianza, poder decir cosas que otros no pueden decir y ser escuchados. En Micoahumado resultó más fácil llegar a un acuerdo de desminado con el ELN que con los grupos paramilitares, y era más probable que el acuerdo se mantuviera debido a las raíces del ELN en la comunidad. En Irlanda del Norte, las conexiones locales entre el IRA y las comunidades era menos evidente, pero la iniciativa de justicia restaurativa dependía de que los antiguos prisioneros asociados con el IRA establecieran contactos convincentes con éste.

> “Es clave que los actores locales comprendan las aspiraciones de un grupo armado y se identifiquen con ellas para poder influenciarlo: establecer confianza, poder decir cosas que otros no pueden decir y ser escuchados.”

Desarrollar y fortalecer las estructuras para la movilización y la organización no violenta

En todos los estudios de caso, la movilización, organización y estrategia de la comunidad fueron elementos clave. Tanto en Micoahumado como en el norte de Uganda, las comunidades se reunieron para discutir la forma en que iban a combatir la violencia que las estaba afectando. Quienes habían convocado esas conferencias locales de paz luego representaron a las comunidades en las conversaciones con los grupos armados. El hecho de que las consultas se hubieran realizado a escala comunitaria les dio peso y credibilidad a los individuos que lideraban los diálogos.

También fue significativa la presencia de redes e instituciones informales o formales que antecedían al conflicto. Los representantes locales traían consigo fuentes existentes, tanto internas como externas, de estatus o autoridad. La ARLPI, en cuanto grupo de líderes religiosos con redes influyentes a nivel nacional e internacional, tenía un acceso al gobierno de Uganda y a la comunidad internacional del que carecían los líderes tradicionales y por ello pudieron, por ejemplo, promover una Ley de Amnistía e incidir a favor de la paz. En Siria, las administraciones civiles en áreas no controladas por el régimen fueron más eficaces cuando había una historia previa de actividad por parte de la sociedad civil o estructuras tradicionales.

El poder contar con redes y estructuras comunitarias preexistentes fortalece a los actores y las instituciones sociales, culturales y de poder político arraigados en la comunidad. En los contextos de los estudios de caso, fueron por lo general los actores tradicionales mayores (hombres) y aquellos religiosos quienes participaron en las negociaciones directas con los grupos armados, y las redes de iglesias las que brindaron protección.

No obstante, el poder que tiene el conflicto de desbaratar el tejido social puede permitir que surjan fuentes de protagonismo social, cultural y político nuevas o anteriormente silenciadas. En Micoahumado, los líderes locales tuvieron que huir, pero dejaron tras de sí una nueva cohorte de activistas comunitarios; posteriormente, las comisiones de paz establecieron la representación igualitaria de las mujeres. En el norte de Uganda, una red de madres acholi fue decisiva para galvanizar el apoyo a las conversaciones con el LRA y la

aceptación comunitaria del retorno de los secuestrados. Las mujeres acholi también han estado a la vanguardia de las actividades de reintegración, apoyando las necesidades particulares de las mujeres retornadas.

Enmarcar las discusiones dentro de las normas culturales y sociales locales

Tal como señala Simon Mason en esta publicación [ver la tabla 1, en la página 24], los actores locales utilizan marcos normativos diferentes a los de sus contrapartes externas, lo cual posibilita un conjunto más amplio de reglas para el diálogo, entre ellas, las concepciones culturales más flexibles e informales de asuntos como la justicia; a menudo compartidas con los grupos armados.

En Irlanda del Norte y el norte de Uganda, los marcos legales y de justicia basados en normas sociales y culturales locales jugaron papeles importantes, a veces complementados por estándares internacionales. Las iniciativas de paz aplicaron lecciones aprendidas de la justicia transicional, tales como las amnistías condicionales, la reconciliación y la justicia restaurativa, que incorporaban costumbres y concepciones tradicionales.

La ARLPI abogó por una Ley de Amnistía que permitiera el retorno de los combatientes, a menudo secuestrados, a sus comunidades, sin temor al enjuiciamiento, lo cual aplicaba los principios de perdón arraigados en la cultura acholi. Los enfoques de justicia restaurativa utilizados en Irlanda del Norte se basaban en los derechos humanos internacionales y los principios legales del Estado de derecho, pero se desarrollaron de acuerdo con consideraciones locales de legitimidad y reputación.

Los actores locales enfrentan riesgos considerables al dialogar con los grupos armados y por ello desarrollan técnicas para reducir dichos riesgos

Las comunidades padecen violencia y violaciones de sus derechos humanos tanto por parte de actores no estatales como de las fuerzas armadas del Estado. Antes de que la ARLPI se internara en la selva para hablar con el LRA, tres líderes tradicionales habían sido asesinados mientras intentaban dialogar con el grupo. En todos los casos presentados en esta publicación, se criminalizaba el contacto con los grupos armados y en Micoahumado, la generación previa de líderes comunitarios tuvo que abandonar el área debido a que las fuerzas de seguridad del Estado los acusaron de apoyar al ELN.

vIncluso cuando un grupo armado está preparado para aceptar alguna reducción en la violencia, es posible que los imperativos militares estratégicos socaven posteriormente esos compromisos. El ELN argumentó que el desminado reducía su ventaja militar. Algunas veces, las restricciones gubernamentales, entre ellas, los regímenes de proscripción y las tácticas de contrainsurgencia, han sido más perjudiciales para los actores locales que el comportamiento de los grupos armados. En Micoahumado y en Acholilandia, norte de Uganda, los esfuerzos realizados por los comités de paz comunitarios se vieron continuamente obstaculizados o amenazados por la intensificación de la violencia.

Vincularse a redes externas y estructuras de apoyo

Las iniciativas locales han cooperado con redes y estructuras de apoyo externas con el fin de mantener un espacio seguro en el cual operar y también para obtener influencia. En la región norte de Uganda y en Micoahumado, los actores locales se dirigieron a las redes religiosas nacionales que tenían una enorme influencia sobre la sociedad, y, por ende, sobre el gobierno, con el fin de lograr protección global para sus iniciativas. También desempeñaron un rol benéfico las organizaciones internacionales de derechos humanos y las organizaciones humanitarias.

En el norte de Uganda, la ARLPI lideró las interacciones con el LRA, aunque algunos de los miembros de ARLPI, entre ellos un sacerdote español, no compartían la etnicidad acholi con el LRA. Varios establecimientos religiosos en Uganda sirvieron de protección contra las acusaciones gubernamentales de colusión con los rebeldes. En Micoahumado, la fórmula de "diálogos pastorales" fue una manera novedosa para que las

comunidades evadieran el asunto de la criminalización del contacto con los grupos armados.

Los actores externos también desempeñaron papeles complementarios al compartir experiencias de otros contextos. Sin embargo, los autores de Accord Insight provenientes del norte de Uganda y de Colombia afirman que las intervenciones externas más bienvenidas y eficaces fueron aquellas en las que las ideas y las normas concordaban con las prioridades y los enfoques locales.

Afirmar la imparcialidad

La imparcialidad es importante para quienes trabajan en áreas controladas por grupos armados. Aunque los actores de paz destacados en esta publicación no eran necesariamente neutrales, pues pertenecían al contexto de conflicto y pueden haber tenido vínculos con un grupo armado, se esforzaron por actuar de manera imparcial para que pudieran servir de intermediarios eficaces entre las dos partes y evitar percepciones de colusión.

La necesidad de mantener la imparcialidad exigió que algunas veces tuvieran que renegociarse las relaciones preexistentes. En Micoahumado, la comunidad se negó tanto a unirse a uno u otro de los actores armados como a oponerse a los dos, ya que estas opciones podrían conducir a su propio desplazamiento. En cambio, optaron por la "tercera vía" de la desobediencia civil, que implicaba negarse a apoyar a ninguno de los actores armados y a mantener una firme posición de no violencia.

La ARLPI, en su papel de conducto de comunicación entre el LRA y el gobierno, redujo el riesgo de acusaciones, ya sea de espiar para el gobierno o de confabularse con el LRA, al insistir en que las partes firmaran sus respectivos mensajes antes de compartirlos con la parte opuesta.

2.

Análisis experto

Entre el combate y el diálogo

>>

Por Sophie Haspeslagh[4]

La política internacional sobre si se debe o no conversar con los grupos armados no estatales (citados como "grupos armados" en esta publicación) es ambigua. Aunque hay una tendencia generalizada a evitar el diálogo político, las experiencias de Irlanda del Norte con el Ejército Republicano Irlandés (IRA) y de Colombia con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) demuestran que hay excepciones.

Los gobiernos y la comunidad internacional tienden a etiquetar a los grupos armados que atacan a los civiles o la infraestructura estatal como criminales, extremistas o terroristas y por ende prefieren las opciones militares y de seguridad a otros tipos de respuesta. Las discusiones recientes sobre grupos como el Estado Islámico (IS) y Boko Haram señalan su naturaleza amorfa, la incertidumbre acerca de su estructura o su falta de una agenda política coherente como grandes obstáculos para el diálogo con ellos.

Allí donde los actores estatales han emprendido conversaciones políticas con los grupos armados, los criterios para ello han sido poco claros. Aunque los cambios concretos en el comportamiento de un grupo pueden alentar el diálogo, es más frecuente que los intereses estratégicos de un Estado en un momento específico o los cálculos tácticos exigidos por la guerra terminen por imponerse. De todos modos, mientras que los Estados ponderan si van o no a dialogar o cómo hacerlo, las poblaciones que conviven con los grupos armados pueden haber ya entrado en contacto con ellos.

> "Mientras que los estados ponderan si van o no a dialogar o cómo hacerlo, las poblaciones que conviven con los grupos armados pueden haber ya entrado en contacto con ellos."

Esta segunda publicación Accord Insight, que forma parte de la serie Accord de Conciliation Resources, explora la forma en que los actores locales se organizan para entablar un diálogo con los grupos armados y cuestionar su recurso a la violencia. La publicación aprovecha el contenido del *Accord 16 (2005)*, *Opciones de compromiso: acercamientos con grupos armados en procesos de paz.* Se basa, además, en un taller de análisis conjunto realizado en noviembre de 2013, que reunió a más de 30 expertos con una vasta gama de experiencia, entre quienes se contaban mediadores internacionales y humanitarios, así como actores de la sociedad civil local, excombatientes y otros que se identificaban con los grupos armados.

Los estudios de caso de Siria, Colombia y el norte de Uganda, así como la más breve reflexión sobre Irlanda del Norte, examinan a fondo por qué y cómo surgen las iniciativas comunitarias de diálogo con los grupos

4 Sophie Haspeslagh es candidata doctoral en el Departamento de Relaciones Internacionales del London School of Economics and Political Science, donde adelanta investigaciones sobre el diálogo con los grupos armados y los efectos de la proscripción sobre los procesos de paz. Hasta 2012 fue Jefe de Políticas en Conciliation Resources, y, anteriormente, manejó la plataforma de incidencia ABColombia. También ha trabajado para el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Argelia, el Programa Mundial de Alimentos en Roma, y el International Crisis Group en Colombia y Bruselas.

armados: ¿quiénes son los actores involucrados y cuáles son los retos que enfrentan? Se espera que los beneficios locales y nacionales de estas iniciativas para la construcción de paz ayuden a configurar opciones constructivas para que los responsables de diseñar políticas y los practicantes respondan a los grupos armados, y que los mismos actores locales puedan aprender de las experiencias de otros que han entrado en contacto con los grupos armados e influido sobre su recurso a la violencia en el corto, mediano y largo plazo.

Diálogo con los grupos armados y construcción de la paz

En el Accord 16, publicado cuatro años después del 11 de septiembre, se presentaban argumentos sólidos a favor de que el contacto con los grupos armados se convirtiera en la norma de las políticas que guiaban los esfuerzos por ponerle fin a los conflictos armados. Diez años después, los gobiernos siguen reacios a permitir espacios para el diálogo, y la discusión sobre cómo acercarse a los grupos armados e influir sobre ellos de manera constructiva ha sido limitada.

> "Hablar con un grupo armado y negociar con él no son la misma cosa. Hablar puede significar sencillamente establecer contacto y puede servir de medio para comprender a un grupo armado, incluidas sus dinámicas y motivaciones."

Las causas de dicha reticencia, señaladas en el Accord 16, siguen siendo válidas; temor a legitimar la violencia o darle credibilidad a exigencias no razonables o no negociables. Sigue siendo la norma calificar de terroristas y criminales las acciones armadas no estatales, mientras que el número de grupos armados incluidos en los listados de terroristas internacionales ha aumentado: en 2011, Marieke de Goede calculó que había 214 grupos armados proscritos en todo el mundo.

Así mismo se ha reducido el espacio para que las organizaciones no gubernamentales (ONG) —locales, nacionales e internacionales— entren en contacto con los grupos armados para la resolución de conflictos o con fines humanitarios. Según el fallo de 2010 de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, en Holder contra el Proyecto de Ley Humanitaria, constituye un delito brindar "asesoramiento experto", "servicios" o "capacitación en observancia de los derechos humanos o solución pacifica de los conflictos" a los grupos armados designados como organizaciones terroristas extranjeras. Dado que la ley estadounidense es extraterritorial, es aplicable también a los no estadounidenses. Este fallo ha producido un "enfriamiento" internacional al desalentar el contacto no oficial con los grupos armados que figuran en los listados. Incluso las organizaciones humanitarias, que por lo general cuentan con un mayor espacio operativo, encuentran que se ha restringido su campo de maniobra.

Al mismo tiempo, hoy día se acepta que grupos anteriormente considerados inalcanzables, tales como los talibanes afganos y las FARC, son participantes en un diálogo político. La inclusión de los talibanes en el listado, junto con Al-Qaeda, de conformidad con la Resolución 1267 de 1999 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, fue una de las muchas herramientas militares y de seguridad utilizadas por la comunidad internacional para tratar de desmantelar y derrotar al grupo.

Pero, a medida que se han hecho cada vez más aparentes las limitaciones de la intervención militar en Afganistán, el reconocimiento de la necesidad de dialogar con los talibanes ha ganado terreno. La Resolución del UNSC fue enmendada en junio de 2011 para separar las listas de los talibanes y Al-Qaeda y facilitar el diálogo. Sin embargo, la comunidad internacional no posee criterios claros que indiquen las condiciones para que un grupo armado sea considerado aceptable para el diálogo político.

En el Accord 16 se proporcionaban indicadores concretos acerca de si era o no factible el diálogo político con un grupo armado, entre ellos, si el grupo ocupaba un territorio, tenía instituciones políticas o agendas, o si disfrutaba de ganancias a raíz de la economía de la guerra. También resaltaba la necesidad de pensar creativamente acerca de las opciones para el

diálogo y desarrollar una concepción más sofisticada de ellas. Hablar con un grupo armado y negociar con él no son la misma cosa. Hablar puede significar sencillamente establecer contacto y puede servir de medio para comprender a un grupo armado, incluidas sus dinámicas y motivaciones. Puede implicar un intercambio de preocupaciones y posiciones y puede ayudar a determinar si se justifican otras formas de diálogo. Negociar implica y requiere del compromiso mutuo de llegar a un acuerdo mediante el diálogo y la negociación.

Hay muchas opciones a lo largo del espectro entre hablar y negociar. Mientras que el Accord 16 reflexionaba sobre cómo el diálogo humanitario podría, por ejemplo, facilitar un contacto más amplio, ha habido poca exploración a fondo de la manera en que los grupos armados pueden ser llevados hacia un diálogo político serio y sostenido. Este Accord Insight espera arrojar luces sobre las interacciones locales con los grupos armados, que a menudo ocurren antes de que se considere la posibilidad de diálogos formales.

¿Qué queremos decir con "local" y "grupo armado"?

El término "local" es un término flexible. Puede ser utilizado por quienes viven por fuera de un contexto específico para describir a quienes habitan en él. Podría decirse que algunas personas son "locales" por sus lazos etnoculturales con un territorio o porque han sido directamente afectadas por la violencia contextual, y que otras lo son porque viven en el área donde opera un grupo armado, independientemente de los vínculos históricos o étnicos.

Dada la complejidad del panorama, en este Accord Insight el término "local" se refiere a las personas que viven en proximidad geográfica con un conflicto. Esta definición permite delimitar el análisis. Por ejemplo, esta publicación no se ocupa del papel de las diásporas, pero sí puede incluir a actores de la sociedad civil que han jugado un papel fundamental en acercarse a los grupos armados aunque no provengan originalmente del área en cuestión, como el misionero español que vivía en Gulu, norte de Uganda. La definición nos permite visualizar la manera en que reaccionan las personas afectadas inmediata y regularmente por las acciones de un grupo armado. Nos ayuda también a superar la dicotomía interno- externo y enfocarnos en las sinergias entre los dos, por ejemplo, la forma en que las iniciativas locales han aprovechado las redes nacionales e internacionales complementarias.

Los grupos armados se caracterizan por la diversidad. Tal como argumentaba Paul Staniland en 2014, puede haber diferencias dramáticas entre los grupos armados, e incluso entre aquellos que luchan contra el mismo gobierno, respecto de sus estrategias, capacidades y bases sociales. En el Accord 16 se describía a los grupos armados como actores que: 1) disputan el monopolio del Estado sobre la fuerza coercitiva; 2) operan por fuera del control efectivo del Estado; o 3) son capaces de facilitar o bloquear y poner en peligro la acción humanitaria o las iniciativas de paz. No obstante, los grupos como Al Shabaab e IS, cuyas aspiraciones y redes son al mismo tiempo locales y transnacionales, ponen en duda estas definiciones.

Los estudios de caso presentados aquí adoptan una concepción más flexible y compleja de los grupos armados. Incluyen grupos con fuertes vínculos con las comunidades locales, como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en Micoahumado, Colombia; grupos que recurren a la violencia extrema y tienen agendas transnacionales, como IS en Siria; y grupos cuyas ambiciones políticas son ambiguas y que son responsables de un alto nivel de violencia indiscriminada en contra de las poblaciones civiles, como el Ejército de Resistencia del Señor (LRA) en el norte de Uganda.

Estos casos exploran la forma en que la relación entre la comunidad local y el grupo armado se ve afectada por: la naturaleza del conflicto, la respuesta del Estado, el tipo y la naturaleza del grupo armado, y la capacidad de la comunidad para movilizarse. Se preguntan si algunos grupos armados son más receptivos a las iniciativas locales y, en caso afirmativo, por qué. También se preguntan por la forma en que la criminalización y estigmatización de un grupo armado como "terrorista" afecta el espacio para que los actores locales entren en contacto con él.

Comunidades y grupos armados

Con frecuencia se describe la relación de un grupo armado con la población local como depredadora —en la que el grupo armado comete violaciones de los derechos humanos, saquea y destruye propiedades, y la población local desarrolla mecanismos de reacción y técnicas de supervivencia; o simbiótica— en las que las poblaciones locales facilitan la violencia del grupo armado y obstaculizan los esfuerzos de contrainsurgencia. Pero la realidad es mucho más matizada y compleja.

En el Accord 16 se observaba que las actitudes de las comunidades o grupos que tienen vínculos estrechos con un grupo armado poseen la capacidad de influir significativamente sobre aquel, especialmente cuando comparten conexiones familiares, tribales, de clan o de parentesco. Los mediadores internos [ver la tabla 1] pueden beneficiarse de esta "parcialidad relacional" con un grupo armado; es decir, de los vínculos más estrechos con un grupo específico basados en lazos personales, políticos o económicos. No obstante, todavía falta una comprensión más precisa del valor de la parcialidad para la construcción de paz efectiva.

> "Si bien es posible que los actores locales no identifiquen inmediatamente una función de construcción de paz en su contacto con los grupos armados, la movilización comunitaria puede ayudar a reducir la violencia o incentivar la participación de los grupos armados en un diálogo político."

Los grupos armados también desempeñan importantes papeles de seguridad y desarrollo, como por ejemplo, el de proporcionar servicios cotidianos. El trabajo de Zachariah Mampilly (2011) sobre la gobernanza de facto por parte de los actores armados subraya que Hezbollah en el Líbano y los Tigres Tamiles en Sri Lanka manejaban los colegios y hospitales y recogían la basura. En el estudio de caso de Colombia incluido en esta publicación, el ELN, en ausencia del Estado, brindaba seguridad y ejercía funciones de gobernanza local. Una de las razones principales por las cuales los grupos armados ofrecen servicios es la de obtener la aquiescencia o el consentimiento de la población local, cuando no su apoyo pleno.

Este Accord Insight examina las acciones proactivas de las comunidades locales tendientes a obtener la provisión de servicios por parte de un grupo armado, pero, al mismo tiempo, a moldear e influir sobre su toma de decisiones táctica y estratégica. Es posible que estos tipos de iniciativa sean la excepción más que la regla, pero plantean preguntas importantes: ¿Por qué deciden ciertos miembros de una comunidad disputar la acción de los grupos armados? ¿Cómo se inician y desarrollan estas iniciativas y qué impacto tienen? ¿Cómo logran algunas personas disputar la autoridad armada a pesar del riesgo personal sustancial?

En el taller de análisis conjunto para el Accord 16, los participantes que tenían vínculos con los grupos armados señalaron que la decisión de un grupo de iniciar un diálogo político suele presentarse como una opción que viene de fuera. De hecho, los grupos armados, al igual que otros actores armados, tienen por lo general estrategias políticas y militares de doble vía. Los hallazgos de la Transition Series de la Fundación Berghof cuestionan los supuestos acerca de las razones por las cuales los grupos armados inician negociaciones, al identificar motivaciones más positivas y dinámicas que la de comprender las limitaciones de la lucha armada.

Los actores comunitarios deben ganarse la confianza del grupo armado, requisito éste que tanto los actores nacionales como externos entienden poco o simplemente ignoran. Los tres casos presentados en este Accord Insight ilustran cómo las iniciativas locales lograron desarrollar y mantener esa confianza. En Siria, los ciudadanos locales de Barzeh lograron influenciar el comportamiento del grupo armado mediante el establecimiento de comités de vecindario; en Colombia, la población local de Micoahumado estableció un vínculo con el ELN aprovechando los profundos lazos históricos y de clase, y en el norte de Uganda las comunidades acholi recurrieron a los lazos étnicos para influir sobre el LRA.

La movilización por la paz

En el Accord 16 se señalaba que con frecuencia las comunidades locales están en capacidad de ofrecer la comprensión más matizada, multifacética y contextualizada de los grupos armados. Con base en ejemplos de la República Democrática del Congo y Sierra Leona, se demostraba que el diálogo no oficial puede construir la voluntad y la capacidad de los grupos armados para participar en un proceso de paz.

La discusión que sigue acerca de los roles de los mediadores internos destaca la complementariedad de los esfuerzos realizados por los mediadores internacionales y los internos, particularmente al explorar la manera en que los actores a nivel nacional (organizaciones no gubernamentales, organizaciones religiosas o profesionales en resolución de conflictos) han logrado facilitar la mediación con un grupo armado. La forma en que las comunidades se dirigen a los grupos armados para fines humanitarios o de desarrollo también ha sido un campo de investigación común. El informe de 2011 de la Academia de Ginebra, *Reglas del juego,* reflexionaba sobre la dependencia de los organismos de asistencia de los líderes y miembros de la comunidad para negociar el acceso a los grupos armados con el fin de promover la protección de los civiles y la entrega segura de la ayuda humanitaria.

Los estudios realizados en 2007 y 2012 por Chris Mitchell y Landon Hancock sobre la resistencia civil al militarismo, incluidos los grupos armados estatales y no estatales, examinan los esfuerzos comunitarios para establecer "zonas de paz". Exploran la manera en que los actores locales han logrado desarrollar mecanismos innovadores de protección y efectivamente salirse del conflicto mediante las negociaciones con los grupos armados.

Sin embargo, ha habido mucho menos análisis de la forma en que las interacciones de las comunidades locales con los grupos armados —con los cuales es posible que "convivan e incluso coman juntos a veces"— pueden ayudar a construir la paz. Los estudios de caso incluidos en este Accord Insight demuestran que si bien es posible que los actores locales no identifiquen inmediatamente una función de construcción de paz en su contacto con los grupos armados, la movilización comunitaria puede ayudar a reducir la violencia o incentivar la participación de los grupos armados en un diálogo político. En el norte de Uganda, la Iniciativa de Paz de los Líderes Religiosos Acholi (ARLPI) intentó establecer contacto con el LRA para ayudar a proteger a la población local; con el tiempo, se convirtieron en un puente hacia el gobierno de Uganda y un estímulo significativo para las negociaciones de paz de Juba en 2006.

Estructura de la publicación

En el primer estudio de caso incluido en esta publicación, Rt. Bishop Macleod Baker Ochola y James O. Latigo revisan los esfuerzos de la ARLPI para acercarse al LRA, los cuales condujeron a un diálogo mediado entre éste y el gobierno de Uganda. El artículo identifica los puntos de influencia clave sobre los cuales pudo incidir la ARLPI, tanto con el LRA como con los actores políticos nacionales, y explora la forma en que el LRA respondió a la iniciativa; desde la reducción de su recurso a la violencia a la aceptación de participar en conversaciones de paz. También destaca los retos del diálogo cuando hay altos niveles de violencia estatal y no estatal, así como los enfoques adoptados para minimizar los riesgos. El artículo va acompañado de una entrevista con el antiguo Comandante del LRA, Capitán Ray Apire, quien reflexiona sobre la manera en que el LRA percibía a la ARLPI.

En el segundo estudio de caso, Mauricio García-Durán y Fernando Sarmiento Santander exploran la iniciativa de la población de Micoahumado en el sur de Bolívar, una de las zonas más candentes del conflicto colombiano. El artículo explica cómo la comunidad logró convencer al ELN de que desminara, unilateralmente, las vías principales que conectaban el pueblo de Micoahumado, en un territorio que se encontraba bajo el control de facto del ELN. El estudio de caso aborda también la manera en que los actores locales soslayaron la prohibición de dialogar con el ELN, proscrito como grupo terrorista.

El tercer estudio de caso examina la efectividad de las iniciativas comunitarias para entrar en diálogo con los

grupos armados en una Siria controlada por los rebeldes, un entorno fluido con altos niveles de inseguridad y violencia. Wisam Elhamoui y Sinan al-Hawat describen la forma en que varias comunidades que viven en estas áreas se han organizado informalmente para facilitar las operaciones de socorro y un bienestar social más amplio. Algunas comunidades han buscado dialogar directamente con los grupos armados para reducir la violencia o coordinar respuestas. El artículo examina el grado de diálogo posible, así como los factores clave que implica el ejercer influencia sobre los grupos armados.

Brian Gormally lleva a cabo una reflexión sobre los esfuerzos de los activistas de la sociedad civil en Irlanda del Norte por promover enfoques alternativos a la violencia punitiva dentro del IRA. La iniciativa —conocida como justicia restaurativa comunitaria— también brindó espacio para que el movimiento republicano iniciara una discusión sobre la seguridad comunitaria y la justicia, así como el rol de la actividad policial formal a medida que empezaban las negociaciones formales de paz.

Un artículo de Insight extrae lecciones de los casos para las políticas y la práctica de construcción de paz. Sugiere la importancia del imperativo de seguridad —proteger del ataque a las poblaciones— como una de las motivaciones principales para que las comunidades locales se acerquen a los grupos armados. Reflexiona sobre la manera en que las iniciativas locales entran en contacto con los grupos armados y a menudo desempeñan un papel crucial en la promoción de la seguridad humana local y la construcción de paz, y en algunos casos apoyan la transformación más amplia de esos grupos. Expone en detalle los riesgos reales que enfrentan los actores locales y destaca la importancia de los vínculos preexistentes con los grupos armados, de las redes que anteceden el conflicto, de las instituciones informales o formales, y el papel de las relaciones y el apoyo externos para adquirir influencia y mantener un espacio.

Tabla 1

Mediadores locales

Simon J A Mason es investigador sénior y jefe del Grupo de Apoyo a la Mediación en el Centro de Estudios para la Seguridad (CSS), Zúrich. Como parte del Proyecto de Apoyo a la Mediación (un proyecto conjunto de CSS y Swisspeace, financiado por el Departamento Federal de Asuntos Exteriores de Suiza), se enfoca en la investigación, la capacitación y el apoyo a procesos de mediación. Es uno de los coordinadores de la Red de Apoyo a la Mediación.

Cada día aumenta más el reconocimiento internacional de la importancia de los mediadores locales. En 2012, el Secretario General de la ONU, General Ban Ki Moon afirmó: "Cada vez se reconoce más que la mediación no es competencia exclusiva de mediadores externos. Los mediadores locales que provienen del país en situación de conflicto pueden dirigir de manera útil las iniciativas locales de mediación o complementar iniciativas nacionales o internacionales" (Report of the Secretary-General A/66/811 25 June 2012).

¿Quiénes son los mediadores locales?

Se entiende por mediación el proceso estructurado de negociación y resolución de conflictos apoyado por un tercero imparcial aceptable. Los mediadores locales —a veces llamados mediadores internos— ayudan a los actores desde el interior de sus propios contextos a desarrollar argumentos mutuamente aceptables. Los mediadores locales, que pueden ser líderes tradicionales, líderes religiosos, líderes de

grupos de mujeres, funcionarios del Estado, actores del sector seguridad y hombres de negocios, tienen credibilidad ante las partes en conflicto e influyen sobre su comunidad. El término "local" es relativo, puesto que la delimitación del contexto puede ser a nivel de pueblo, subregión o país.

¿A qué niveles trabajan?

Típicamente, los mediadores locales llevan a cabo esfuerzos informales de paz, en los cuales su mandato se halla menos prescrito y la confianza se construye mediante relaciones más que a través de instituciones formales. Aunque por lo general se enfocan en el nivel subnacional, hay casos en los que los mediadores locales también han asumido el papel de facilitadores a nivel nacional.

Durante la crisis electoral de 2007–2008, un grupo de keniatas eminentes creó la iniciativa de Ciudadanos Preocupados por la Paz en respuesta a la violencia electoral. Esto reunió a mediadores de paz y miembros de la sociedad civil de Kenia para aportar al proceso de mediación formal liderado por Kofi Annan, y ayudar a vincular actores relevantes oficiales y no oficiales a los niveles nacional y subnacional. En Nepal, las partes principales en las negociaciones que condujeron al Acuerdo Integral de Paz de 2006 no aceptaron a un mediador formal externo. Más bien, actores locales e internacionales ayudaron a transmitir mensajes entre las partes y apoyaron el proceso de negociación de una forma mucho menos estructurada y directiva.

¿Cómo trabajan?

Aunque es posible que no haya diferencias fundamentales entre los tipos de actividades que realizan los mediadores locales y aquellos no locales, el marco normativo dentro del cual trabajan sí es diferente y se halla influenciado, en mayor o menor grado, por los marcos legales locales: moderno (formal, nacional); tradicional (v.g. respecto del uso colectivo de la tierra); o religioso (v.g. respecto de la compensación por daños de acuerdo con los estándares religiosos locales predominantes).

En algunos casos, puede haber tensiones entre la ley formal moderna, basada en los derechos individuales, y la ley consuetudinaria, en la que el castigo colectivo puede representar una opción pragmática, por ejemplo para minimizar el uso de la violencia en las disputas entre comunidades como las relativas al robo de ganado. Los mediadores locales están bien preparados para manejar esas tensiones ya que conocen profundamente las normas culturales relevantes. Las consideraciones culturales también influyen sobre los métodos para construir relaciones, el estilo de comunicación y las percepciones sobre qué constituye un proceso justo. Los mediadores locales en el noreste de Kenia, por ejemplo, tienden a estar influenciados por la cultura somalí, que considera la poesía y la narrativa como herramientas de comunicación.

Fortalezas de los mediadores locales

Las fortalezas principales de los mediadores locales son la profundidad de su conocimiento contextual y el alcance de sus redes locales. Estas se basan en la confianza y es posible que deriven del hecho de ocupar una posición particular y tener un cierto nivel de autoridad dentro de sus comunidades. Dado que los mediadores locales tienen una cercanía geográfica y cultural con un contexto específico, pueden

estar más conscientes del potencial de intensificación del conflicto y, por ello, mejor preparados para intervenir con el fin de evitar la violencia antes de que estalle.

Los mediadores locales pueden ayudar a lograr pausas en el combate, ceses al fuego más largos, o la resolución plena del conflicto mediante el acuerdo mutuo, el cual puede incluir, por ejemplo, mecanismos de compensación o justicia. La intervención efectiva suele requerir relaciones fuertes con las partes en conflicto, tanto estatales como no estatales, así como con los líderes comunitarios. Con frecuencia, los mediadores locales trabajan sobre los conflictos mucho antes de que se movilice la comunidad internacional y siguen ahí mucho después de que aquella se retire. Por lo tanto, gozan de una legitimidad local significativa debido a su compromiso y relaciones, lo cual puede ayudar a mantener intacto el tejido social en tiempos de crisis.

Mediación local y grupos armados no estatales

Los mediadores locales tienen contacto frecuente con los actores armados no estatales, especialmente en áreas donde la presencia del Estado es débil o depredadora. A veces, los procesos locales de mediación han llevado al establecimiento de "zonas de paz" relacionadas con territorios específicos. Los arreglos locales no conducen automáticamente a un acuerdo de paz a nivel nacional, ya que pueden carecer de autoridad más allá de su contexto inmediato. Pero pueden brindar lecciones útiles y facilitar un ambiente más conducente a los procesos políticos formales.

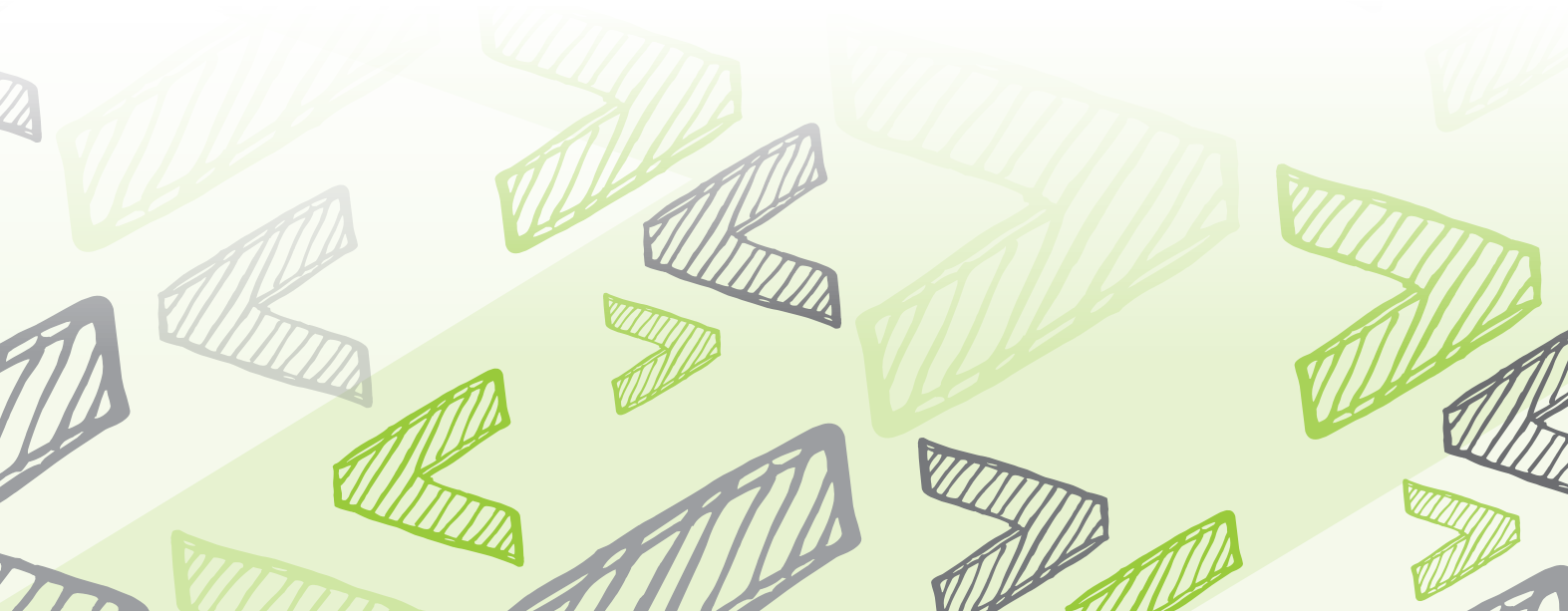
Retos y respuestas

Los mediadores locales enfrentan retos que incluyen amenazas a su seguridad personal y la carencia de experticia técnica; por ejemplo, en relación con acuerdos de cese al fuego u opciones institucionales para compartir el poder, tales como los modelos de federalismo o descentralización. Pueden ser acusados de sesgo o parcialidad, pues las partes en conflicto de un lugar o comunidad pueden desconfiar de los mediadores asociados con otro. Varios enfoques tendientes a ampliar la mediación local mediante la cooperación interna y externa han ayudado a responder a estos retos y a maximizar las fortalezas de los mediadores locales. Algunos de estos son:

Comediación: Para atenuar las percepciones de parcialidad, los mediadores locales pueden trabajar en equipos conformados transversalmente a partir de diferentes ejes del conflicto.

Comités de paz: Los mediadores locales pueden formar parte de una más amplia "infraestructura para la paz" o "arquitectura de paz"; un sistema para coordinar y apoyar los procesos de paz. Esto puede incluir una red establecida de mediadores locales en la forma de comités de paz que se reúnen regularmente (v.g. una vez al mes) y pueden reaccionar rápidamente cuando surjan las tensiones. Por lo general, el trabajo de los comités de paz va más allá de la mediación e incluye educación para la paz o trabajo en políticas, lo cual ayuda a abordar las causas estructurales de la violencia y no solamente el conflicto inmediato.

Redes regionales e internacionales: El apoyo externo puede contribuir a mitigar los riesgos de seguridad, las percepciones de parcialidad o la falta de conocimiento técnico. Los actores regionales e internacionales también pueden proporcionar contactos diplomáticos o políticos de los cuales carecen los mediadores locales, brindar un tipo de legitimidad diferente y aportar lecciones comparativas de otros contextos.



3.

Estudios de caso

Norte de Uganda:

La Iniciativa de Paz de los Líderes Religiosos Acholi: Mediación local con el Ejército de Resistencia del Señor

>>

Por James O. Latigo[5] y Su Excia.Revma. Obispo Macleod Baker Ochola[6]

Durante dos décadas, la región norte de Uganda fue devastada por la guerra entre el gobierno de Uganda y el Ejército de Resistencia del Señor (LRA). La Iniciativa de Paz de los Líderes Religiosos Acholi (ARLPI) —una red religiosa interconfesional— se desarrolló para apoyar la movilización de la comunidad a favor de la paz. Este artículo rastrea el desarrollo de la ARLPI desde sus orígenes populares hasta su papel como intermediario creíble entre los comandantes del LRA en la selva y el gobierno. En ausencia de esfuerzos formales y sostenidos por la paz, la falta de intermediarios confiables y la violencia frenética perpetrada por el LRA y las fuerzas armadas del Estado, el grupo se convirtió en una voz importante a favor de la paz.

El LRA surgió en los años posteriores al derrocamiento de la junta militar en Uganda en 1986 por parte del Ejército de Resistencia Nacional (NRA) de Yoweri Museveni. En Acholilandia, norte de Uganda, se formaron diversos grupos para oponer resistencia al nuevo régimen, entre ellos el Movimiento/Ejército Democrático del Pueblo de Uganda (UPDM/A), y el Movimiento del Espíritu Santo (HSM) liderado por la carismática Alice Auma. El HSM sufrió una importante derrota en 1987 y el UPDM/A finalmente selló un acuerdo con el gobierno, pero los remanentes descontentos de los dos grupos se reunieron a partir de 1987 en lo que luego se conocería como el LRA, liderado por Joseph Kony. El LRA afirmaba estar luchando en contra del mal manejo económico y la gobernanza antidemocrática del nuevo gobierno, así como de la extensas violaciones de los derechos humanos perpetradas por el ejército en Acholilandia. Esto iba de la mano de una creencia espiritual: los combatientes del LRA veían su lucha como una causa divina guiada por Dios a través de su profeta Kony.

La resistencia inicial al NRA tuvo un amplio apoyo por parte de la población acholi. A medida que se intensificaba el conflicto entre el Ejército de Uganda (la Fuerza de Defensa del Pueblo de Uganda – UPDF) y el LRA, los dos no sólo se atacaban mutuamente sino que, al mismo tiempo, dirigían sus operaciones en contra de la poblaciones locales, exponiendo a los civiles a una violencia brutal y fracturando la sociedad acholi; miles de personas fueron mutiladas, violadas y asesinadas.

En 1991, el gobierno implementó una política de desplazamiento forzado de la población hacia "campamentos protegidos", como parte de su campaña de contrainsurgencia, la Operación Norte. Esto logró el aislamiento efectivo del norte del resto del país, aunque de hecho los campamentos se habían establecido de manera no oficial desde 1986. El LRA pasó a depender cada vez más del gobierno sudanés en Jartum, que lo utilizó para desestabilizar el sur del Sudán. Kony recurrió al reclutamiento forzado de niños y niñas de las poblaciones acholi, y se calcula que para 2006 había secuestrado a unos 30.000 menores.

5 Ojera James Latigo es Director de Programa del Consejo de Memoria Histórica y Reconciliación de Uganda e Investigador y Coordinador Académico del Marcus Garvey Pan-Afrikan Institute. También es asesor del Programa de África Oriental y África Central de Conciliation Resources.

6 Su Excia. Revma. Obispo Ochola fue Obispo Anglicano de la Diócesis de Kitgum. Es miembro de la Junta y Embajador de Paz de ARLPI, y Fundador y Presidente de la Iniciativa de Educación Acholi. Sigue siendo un comprometido activista por la paz.

La formación de la ARLPI

Los esfuerzos iniciales de paz no fueron exitosos. La iniciativa más significativa se dio en 1994, cuando la Ministra de Estado para el norte de Uganda, Betty Bigombe (una acholi), emprendió negociaciones con el LRA a nombre del gobierno. Pero las conversaciones fracasaron cuando el presidente Museveni afirmó que el LRA estaba aprovechando los diálogos como pantalla para rearmarse en Sudán, y expidió un ultimátum para que los rebeldes "se rindieran o fueran aplastados".

En 1997, varios líderes religiosos, muchos de los cuales habían sido personalmente afectados por el conflicto, se reunieron para pronunciarse en contra de la violencia. Entre ellos se encontraban el Obispo Anglicano de la Diócesis de Kitgum, Macleod Baker Ochola II; el Arzobispo Católico de Gulu, Arquidiócesis del Norte de Uganda, John Baptist Odama; el Vicario Episcopal de la Iglesia Católica, Monseñor Matthew Ojara; el padre Carlos Ludigrie; y el padre Joseph Genna. La ARLPI, una entidad interconfesional, reunió a católicos, anglicanos, musulmanes, cristianos ortodoxos, adventistas del séptimo día y cristianos renacidos (Born-Again Faith Federation) en un solo organismo.

En 1998, la ARLPI celebró su primer evento público: *BedoPiny pi Kuc* (sentarse por la paz), que atrajo a más de 150 acholis, entre ellos los padres de niños secuestrados, jefes tradicionales y ancianos de la comunidad, líderes de consejos locales, maestros y trabajadores comunitarios para discutir los efectos del conflicto sobre la comunidad y las estrategias para superarlo. Sus preocupaciones principales eran la incapacidad de las fuerzas gubernamentales para protegerlos, el desplazamiento forzado, las atrocidades y el saqueo del LRA y la UPDF, y el retorno de los niños secuestrados.

Prevalecía un sentimiento de ira porque el gobierno había socavado los esfuerzos de paz de Betty Bigombe. A pesar de una reducción en el apoyo al LRA, los participantes se mostraban frustrados porque el gobierno no estaba abordando los problemas políticos planteados por los rebeldes. La crisis humanitaria también requería atención urgente. Las madres afectadas hicieron un emotivo llamado para que les dieran la oportunidad de hablar con los líderes rebeldes. Se llegó al consenso de que la guerra no podía ganarse mediante la acción militar, que la comunidad debía exigir una resolución pacífica del conflicto y que las partes en conflicto debían reunirse para llevar a cabo un diálogo mediado.

Estas decisiones fueron influenciadas por los valores y las normas tradicionales del pueblo acholi, que subrayaban la reconciliación y los enfoques restaurativos más que los actos de venganza. La ARLPI recalcó la importancia de la no violencia y de aliviar el sufrimiento del pueblo, y argumentó que la mayoría de los combatientes rebeldes no se habían ido a la selva por su propia voluntad, y que por ello había un imperativo moral de salvaguardar las vidas de eso niños y niñas secuestrados. El trabajo de la ARLPI fue fundamental para cambiar la forma en que la comunidad hablaba del LRA: en lugar de verlos simplemente como perpetradores de la violencia, algunos de ellos fueron vistos como víctimas del secuestro a quien el gobierno no había protegido.

"El trabajo de la ARLPI fue fundamental para cambiar la forma en que la comunidad hablaba del LRA: en lugar de verlos simplemente como perpetradores de la violencia, algunos de ellos fueron vistos como víctimas del secuestro a quien el gobierno no había protegido."

La ARLPI y otros líderes comunitarios comenzaron a organizar manifestaciones y grupos de oración a favor de la paz. Estas fueron una fuente de apoyo para la comunidad, pero su propósito era también demostrarle al gobierno y al LRA la necesidad y el deseo de paz de las comunidades También se realizaron varios intentos por construir lazos con los combatientes del LRA que se hallaban en el monte, entre ellos la publicación de mensajes de paz en la prensa y la fijación de afiches en mercados frecuentados por miembros del LRA. Ciertos programas transmitidos por Radio Libertad, una emisora estatal, y luego por la Mega FM sirvieron de foro para que la gente expresara sus posiciones y le planteara los problemas directamente al LRA (cuyos miembros, se sabe, sintonizaban la emisora) y a las fuerzas de seguridad del Estado.

La ARLPI también le escribió cartas pastorales —cartas abiertas publicadas en la prensa— al LRA y al gobierno. Dichas cartas destacaban la urgente necesidad de una resolución pacífica del conflicto y se pronunciaban con vehemencia en contra del desplazamiento forzado y las malas condiciones en los campamentos de desplazados. Así mismo, los mensajes animaban a los miembros del LRA a asistir a la iglesia en los días santos, con la esperanza de que allí pudieran alentarlos para que retornaran a sus comunidades.

Acercamientos al LRA

Muchas figuras de la ARLPI eran conocidas para el LRA y muchos líderes tradicionales mantenían contactos informales con los cuadros del LRA, en particular con los secuestrados que tenían relaciones de parentesco con las comunidades. Kony mismo había sido monaguillo y sentía respeto y afinidad hacia los sacerdotes católicos. Aun así, el contacto directo con el alto comando del LRA era difícil, especialmente después de que aquella se trasladó al sur de Sudán. También resultaba peligroso: el LRA había asesinado a tres líderes tradicionales que, con anterioridad a los esfuerzos de Bigombe, habían intentado convencerlos de que participaran en conversaciones de paz.

La promulgación de la Ley de Amnistía de 1999 y la subsiguiente creación de una Comisión de Amnistía fortalecieron la posición de la ARLPI. Les proporcionó el espacio legal y político para insistir en el diálogo y reforzó el imperativo moral del perdón de quienes habían sido secuestrados. Los miembros de la diáspora fueron esenciales para atraer la atención internacional sobre la cuestión de la amnistía con el fin de convencer al gobierno de Uganda. Los parlamentarios acholi también fueron clave para garantizar que la Ley fuera aprobada por la legislatura a pesar de la reticencia inicial del gobierno, mientras que el amplio apoyo popular de la población acholi facilitó aún más el proceso.

La ARLPI trató de establecer contacto con el LRA a través de los líderes tradicionales en Uganda y ciertos individuos en Nairobi que decían tener acceso a Kony. Hubo un avance en octubre de 1999 cuando al entonces Arzobispo Anglicano, Nelson Onono-Onweng, le llegó un mensaje por medio de Yusuf Adek, un consejero cercano a Kony. El obispo fue conducido solo a un lugar desconocido para reunirse con los comandantes del LRA. El acoso y la vigilancia subsiguientes por parte de la UPDF demoraron mayores contactos. Finalmente, en abril de 2001, otros líderes religiosos y tradicionales lograron reunirse personalmente con comandantes de alto nivel del LRA. El punto central de las conversaciones fue la implementación de la Ley de Amnistía de 1999, que les permitía a los combatientes rendirles informes a los líderes religiosos.

No obstante, la Operación Puño de Hierro, una ofensiva militar masiva emprendida por el gobierno en marzo de 2002, empujó de nuevo al LRA hacia el norte de Uganda. Los secuestros y ataques contra los civiles se intensificaran a medida que el LRA extendía su dominio más allá de Acholilandia, hacia las subregiones de Lango y Teso. Poco convencidas de los llamados de la ARLPI a la negociación, las comunidades formaron grupos de autodefensa, conocidos como las Brigadas Flecha, para unirse a la UPDF en la lucha contra el LRA. Esta tendencia se vio agravada por las tensiones étnicas, ya que las poblaciones Langi le atribuyeron las atrocidades al LRA "acholi".

Pero las oportunidades para el diálogo se siguieron dando incluso en medio de la violencia y la discordia. El Arzobispo Odama recibió una llamada directa del vicecomandante del LRA, Vincent Otti, quien les solicitó a los líderes religiosos que mediaran entre el gobierno y el LRA. Los líderes de la ARLPI aprovecharon esta muestra de confianza para iniciar el diálogo. Miembros escogidos de la ARLPI y líderes tradicionales incursionaron sin escolta en la selva para reunirse con el LRA durante tres días. Las discusiones se llevaron a cabo con comandantes de alto nivel, pero sin la presencia de Kony: los emisarios pensaban que sería difícil lograr compromisos claros con el impredecible líder y que sería más productivo hablar con el personal de segundo rango.

Las reuniones iniciales dependieron de que el LRA se comunicara. Éste enviaba una carta o un mensaje personal a alguien en particular —con frecuencia al líder

tradicional Rwot Oywak del Distrito de Pader o al padre Carlos Rodríguez— quienes, a su vez, informaban a los demás líderes religiosos y tradicionales. El LRA escogía la fecha, el lugar, y las personas que debían asistir a la reunión. El Arzobispo John Baptist Odama, Sheik Musa Khalil, el Obispo Ochola II, y el padre Carlos Rodríguez fueron por lo general los llamados con más frecuencia a reunirse con los altos comandantes del LRA.

En cada reunión, los líderes comunitarios le pedían al LRA que no siguiera matando civiles, que permitiera el retorno de los secuestrados y que buscara la paz y la reconciliación. Los representantes del LRA se negaban con vehemencia, argumentando que se estaban defendiendo de los ataques de la UPDF y que por ello no debían ser condenados. Resultaba difícil comprender este argumento dado que estaban asesinando gente inocente en los pueblos, en lugar de atacar los cuarteles militares en la subregión acholi.

"El estatus de los fundadores de la ARLPI como líderes religiosos y sus lazos con las redes de iglesias han sido cruciales. Las iglesias cristianas, sobre todo, son instituciones formidables en Uganda, que logran trascender las divisiones étnicas, geográficas y políticas."

Mantener la imparcialidad a pesar de la inseguridad

La desconfianza marcaba la situación. La población en general era objeto de sospecha por ambos lados: el gobierno acusaba a los civiles de "colaboración con los rebeldes", mientras que el LRA acusaba a los mismos civiles de divulgar al gobierno información acerca de sus posiciones y suministro de alimentos. Joseph Kony consideraba "rebelde" a la comunidad por negarse a apoyarlo. Hasta los mismos líderes religiosos eran objeto de la desconfianza por parte del LRA, que los acusaba de utilizar al LRA para obtener financiación de la comunidad internacional para su propio beneficio. El LRA puso a prueba a la ARLPI al permitir el retorno de las niñas secuestradas que habían tenido hijos en el monte. Los líderes religiosos fortalecieron su credibilidad al cuidar a todas las liberadas y a sus hijos.

Los líderes religiosos también fueron presionados por las fuerzas del gobierno para que aceptaran "escolta y protección", pero el LRA trazó una línea en el mapa más allá de la cual le quedaba prohibido pasar a las fuerzas del gobierno. En consecuencia, el gobierno acusó de "colaboradores rebeldes" a los líderes religiosos. En marzo de 2002, Uganda aprobó una Ley Antiterrorismo que convertía en delito el pertenecer al LRA, un año después de que el Departamento de Estado de los Estados Unidos hubiera incluido al LRA en su "lista B" de "otras organizaciones terroristas". Esto expuso a la ARLPI a imputaciones por traición.

El estatus de los fundadores de la ARLPI como líderes religiosos y sus lazos con las redes de iglesias han sido cruciales. Las iglesias cristianas, sobre todo, son instituciones formidables en Uganda, que logran trascender las divisiones étnicas, geográficas y políticas. Debido a su base de poder, al gobierno se le complicó tanto ignorar a los líderes religiosos como meterlos a la cárcel.

El Arzobispo Odama y el Obispo Ochola II se reunieron con el presidente Museveni en abril de 2002 para obtener autorización oficial para que los líderes religiosos y tradicionales dialogaran con el LRA. La solicitud fue aprobada con la condición de que los obispos rindieran un informe a los encargados de la seguridad del gobierno después de cada reunión con el LRA.

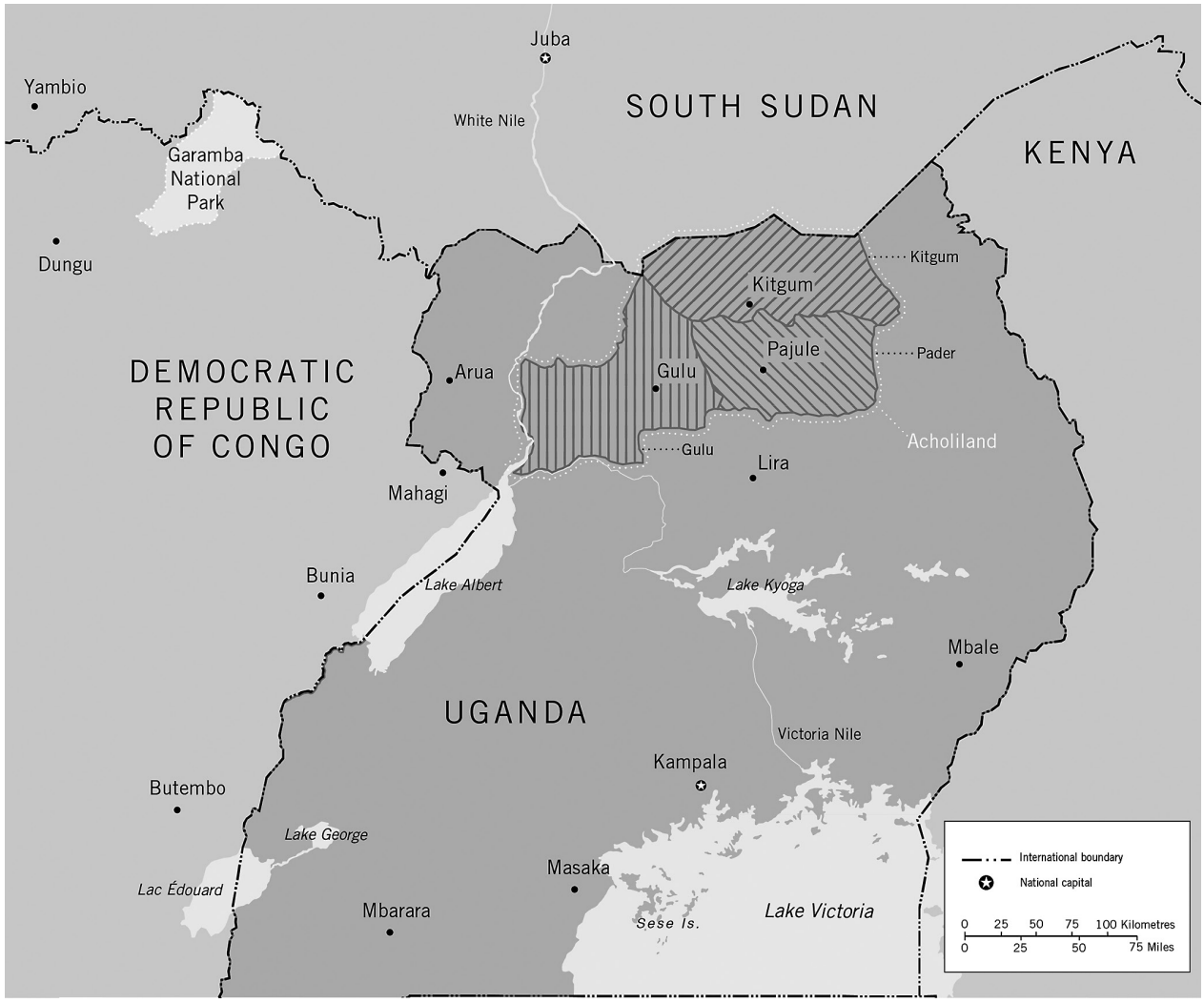
"En sus reuniones con el LRA [la ARLPI] solicitó que todas las exigencias y todos los compromisos se pusieran por escrito y se firmaran, con el fin de evitar que los acusaran de inventar o cambiar las posiciones del LRA o del gobierno."

La ARLPI buscó destacar su imparcialidad como un "puente hacia la paz" entre el LRA y el gobierno. En sus reuniones con el LRA, solicitó que todas las exigencias y todos los compromisos se pusieran por

escrito y se firmaran, con el fin de evitar que los acusaran de inventar o cambiar las posiciones del LRA o del gobierno. La ARLPI sostuvo más de 24 reuniones con el LRA, de las cuales se entregaron las actas, con copias en físico, tanto al presidente de Uganda como al LRA, para garantizar la transparencia y la coherencia.

No obstante, los encuentros entre los líderes comunitarios y el LRA fueron blanco de ataque por parte de las fuerzas del gobierno desde un comienzo. La segunda reunión, celebrada cerca de Pajule en abril de 2001, fue interrumpida de manera violenta por la UPDF y un líder cultural resultó herido. La quinta ronda de reuniones en Pajule en abril de 2003 fue suspendida abruptamente debido a intensos bombardeos por parte de las tropas de la UPDF durante tres días. Al cesar los bombardeos, los tres sacerdotes fueron arrestados y detenidos por un breve período de tiempo. El ejército sostenía que su fuerza de operaciones en el campo no había sido informada de la reunión, aunque se había mantenido enterado al alto comando del ejército de los intentos de diálogo en curso.

A su vez, el LRA acusó a la ARLPI de servir de señuelo para el ejército. Kony les ordenó a sus comandantes que mataran a todo líder religioso que intentara volver a ponerse en contacto con el LRA. En medio de la creciente violencia, la ARLPI intentó aclarar su posición, argumentando que no podría haber sido cómplice dado que sus propios líderes estaban en el monte para mediar y jamás sacrificarían a sus colegas líderes, ni mucho menos condonarían los actos de violencia.



El camino hacia Juba

A medida que continuaba el combate, los esfuerzos formales por facilitar las conversaciones entre los Equipos de Paz de la Presidencia y el LRA tambalearon en 2003, cuando el LRA rechazó los llamados para reunirse en "zonas seguras" sin garantías más amplias. Sin embargo, la ARLPI logró retomar su rol de diálogo, entregando cartas y sirviendo de enlace con el gobierno a través de ciertos parlamentarios acholi clave y las redes religiosas. El LRA comenzó a responder a las exigencias de liberar a los cautivos, aunque seguían cometiendo atrocidades contra los civiles. A la liberación de secuestrados un día podía seguir la captura de otro grupo de niños al día siguiente.

La ARLPI contribuyó a atraer la atención nacional e internacional sobre el conflicto, contrariamente a los intentos del gobierno de Uganda por contener la situación, presentándola como un problema interno que requería una solución exclusivamente interna. A finales de 2003, el presidente de ARLPI, el Arzobispo Odama lideró un equipo de diez personas en una gira de incidencia en los Estados Unidos, Canadá y Europa, promoviendo el informe de investigación realizado por el Afrika Study Centre y el Human Rights and Peace Centre, Universidad de Makerere, *The Hidden War, the Forgotten People: War in Acholiland and its Ramifications for Peace and Security in Uganda (La guerra oculta, los pueblos olvidados: la guerra en Acholilandia y sus ramificaciones para la paz y la seguridad en Uganda).*

La ARLPI también se benefició del apoyo y la defensa internacional de su causa, tanto estatal como no estatal, la cual desempeñó un papel importante al visibilizar el problema a nivel internacional y ejercer presión sobre el gobierno de Uganda.

Durante años, los niños del norte de Uganda caminaban largas distancias hasta el centro de los pueblos para pasar la noche en las calles por temor al secuestro. Les daban el nombre despectivo de "viajeros nocturnos". En 2003, los líderes religiosos liderados por el Arzobispo Odama entraron en contacto con los niños y pasaron cuatro noches durmiendo con ellos en una estación de bus en Gulu. Esto atrajo la atención masiva de los medios nacionales e internacionales e impulsó a muchas agencias humanitarias gobiernos a que respondieran y suministraran apoyo para aliviar la situación de los niños afectados.

El gobierno ordenó finalmente un cese al fuego de siete días hacia finales de 2004 para que Betty Bigombe pudiera proseguir los diálogos con el apoyo de los Estados Unidos, el Reino Unido y Países Bajos, pero las hostilidades continuaron.

A medida que el gobierno de Sudán y el Movimiento/Ejército de Liberación del Pueblo Sudanés avanzaban hacia la firma de un Acuerdo de Paz Integral (CPA), la posición del LRA en Sudán se hacía más vulnerable. El CPA, firmado en 2005, le otorgó un estatus semiautónomo al sur de Sudán, bajo el Gobierno de Sudán del Sur (GoSS). La ONG IKV Pax Christi, con sede en los Países Bajos, facilitó el contacto con el Vicepresidente de GoSS, Dr. Riek Machar, quien logró asumir el rol de mediador entre el gobierno de Uganda y el LRA. Las delegaciones, entre ellas la ARLPI, realizaron numerosos viajes a las nuevas bases de Kony en el bosque de Garamba, en la República Democrática del Congo (RDC), para comunicar sus preocupaciones y posiciones mutuas. Se considera que éstas fueron instrumentales para persuadir a la comandancia del LRA de participar en las conversaciones de paz que se iniciaron en Juba, Sudán del Sur, en 2006 y que durarían casi dos años.

Los miembros de la ARLPI fueron invitados a las conversaciones de Juba en calidad de observadores. En varias ocasiones durante las negociaciones, tanto el LRA como el equipo negociador del gobierno recurrieron a los miembros de ARLPI para clarificar ciertos temas relacionados con la agenda de negociación. La ARLPI también desempeñó un papel fundamental al mantener informadas a las comunidades, generando así apoyo público para el proceso.

En Juba se firmaron cinco acuerdos sobre justicia, rendición de cuentas, desmovilización, desarme y reinserción. Pero Kony dejó de presentarse dos veces para la firma del Acuerdo Final de Paz, aduciendo insatisfacción con la manera en que se había manejado el tema de la reinserción y el bienestar de sus tropas, y

con la negativa de la Corte Penal Internacional (CPI) a suspender las órdenes de arresto. La UPDF y los militares estadounidenses concluyeron que el LRA había estado utilizando el período de diálogos para reorganizarse y en diciembre de 2008 se lanzó la Operación Rayos y Truenos en contra de las bases del LRA en el bosque de Garamba, aplastando así las esperanzas de una resolución pacífica.

Desde Juba, la ARLPI ha seguido siendo un canal viable para la comunicación con el LRA. En un entorno en el que las partes en conflicto han preferido las opciones militares y la influencia regional e internacional ha tenido peso, ha sido importante la capacidad de la ARLPI para interactuar con los grupos armados, las comunidades y los actores nacionales e internacionales.

Del 2008 en adelante, ha habido tres llamadas de supuestos representantes del LRA que buscaban revivir los diálogos, pero ha prevalecido la falta de contacto confiable. Hoy día, las operaciones y las bases del LRA están dispersas entre Ecuatoria Occidental, en Sudán del Sur, la RDC y la República Centroafricana (RCA) y la volátil región de Darfur en Sudán. Es probable que la posibilidad de que el gobierno de Uganda cuente con moderna tecnología de monitoreo suministrada por los asesores estadounidenses haya hecho que el grupo desconfíe de los dispositivos de comunicación.

La ARLPI, junto con las iglesias hermanas y las organizaciones tradicionales en Uganda, Sudán del Sur, RDC y RCA, han formado un Grupo de Trabajo Regional sobre el LRA, con el apoyo de ONG internacionales [ver *La construcción de paz comunitaria regional: una conversación con John Baptist Odama, en Accord 22*, 2011]. El grupo se reúne con regularidad para revisar la situación del LRA y sigue buscando establecer contacto y posiblemente reanudar los diálogos de paz.

Conclusión

La ARLPI ha afrontado muchos retos en sus intentos de diálogo con el LRA para promover la paz en la comunidad y más allá de ella. Ha sido objeto de sospecha por las partes opuestas y ha operado con frecuencia en condiciones muy precarias. Las comunidades se hallan divididas y a veces se resisten a los esfuerzos de paz.

Gran parte del trabajo de la ARLPI ha tenido que ver con apoyar los procesos tradicionales de reconciliación acholi *(MatoOput)*, preparar a la comunidad para recibir a los excombatientes, y promover la Ley de Amnistía mediante la traducción y distribución de versiones en Luo. Esto ha implicado superar las diferencias de opinión y de confesión dentro de la ARLPI, así como profundas y acaloradas discusiones sobre temas como la rendición de cuentas, incluidos el papel de la CPI y los mecanismos tradicionales de justicia tales como los procesos de narración de la verdad y la reparación. Si bien los acercamientos al LRA han tenido resultados variados, tal vez lo más significativo del trabajo de la ARLPI ha sido fortalecer la resiliencia y la unidad de la comunidad frente a la violencia extrema, y fomentar la confianza y la disposición de la gente a apoyar las actividades de construcción de paz.

Tabla 2

Conversación con el excomandante del LRA, Capitán Ray Apire

El Capitán Ray Apire fue secuestrado por el Ejército de Resistencia del Señor (LRA) en 1993 en su pueblo nativo de Lamola, distrito de Kitgum, en el norte de Uganda. Fue el Catequizador Principal (maestro de la fe) del LRA hasta que se entregó a la Fuerza de Defensa del Pueblo de Uganda (UPDF) en 2004. Desde entonces ha orientado y aconsejado a los nuevos retornados del LRA en la Unidad de Protección de Menores de la UPDF en Gulu.

En esta entrevista, el Capitán Apire reflexiona sobre la forma en que el LRA percibía la Iniciativa de Paz de los Líderes Religiosos Acholi (ARLPI). La entrevista fue realizada por James Latigo en Acholi y luego traducida al inglés.

¿Por qué cree que el LRA estaba dispuesto a hablar con los representantes de la ARLPI?

El LRA no confía en nadie. Por eso ha sobrevivido tanto tiempo. Cuando digo LRA, me refiero a Joseph Kony. Él daba las órdenes y tomaba las decisiones por nosotros, aunque a menudo decía que era el "espíritu" el que hablaba. Por ejemplo, cuando decidía convocar a un desfile general, nos decía que el espíritu le había ordenado que lo hiciera.

Nosotros no conocíamos la ARLPI como organización. Pero conocíamos a ciertos miembros que eran líderes religiosos eminentes. Kony mismo había sido monaguillo cuando era joven. Respetaba a los sacerdotes, especialmente a los católicos. Cuñado llevaban a cabo operaciones y emboscadas, le ordenaba a los combatientes que no se metieran con los sacerdotes.

¿Cuál era la razón para ello?

Se decía que él había querido ser sacerdote. Creo que por eso le permitió a Vincent Otti, su vicecomandante, que llamara al Arzobispo Odama [un miembro de ARLPI]. Kony es un hombre muy inteligente. Decía que el espíritu le prohibía hablar y que por eso sus comandantes principales como Otti y luego Sam Kolo hablaban a nombre suyo. Cuando Kony se decide a hablar, habla como una metralleta —tatatatata— sin que nadie le interrumpa.

¿Y qué pasó después de que Vincent Otti llamó al Arzobispo Odama?

Yo no estuve muy involucrado en las operaciones, pero escuché una conversación relativa a que habían dejado una carta en la residencia del Arzobispo. Así fue como les dieron indicaciones e instrucciones [a los miembros de ARLPI] sobre el lugar de la reunión. Por desconfianza, Kony no quería que los líderes religiosos fueran acompañados por el ejército. Por eso cambiaron el lugar varias veces para confundir al ejército.

Sus representantes se reunieron con los líderes religiosos en secreto. Yo no sé quién estaba allí [del LRA] aparte de Otti, pero dijeron que había que mandarle un mensaje al gobierno de que ellos querían diálogos de verdad. Así hubo numerosas comunicaciones secretas. La tropa del LRA no fue informada de esto, creo yo que para mantenerlos leales. Kony infundía bastante miedo a quienes eran capturados. También le hacía creer a la gente que el espíritu era el que guiaba sus pensamientos y planes.

Los líderes religiosos no fueron solos a las reuniones subsiguientes, sino acompañados por otros miembros de la comunidad. ¿El LRA confiaba en los líderes comunitarios?

Para nada. Kony solía decir que la comunidad acholi es como *dogiryo*; una serpiente de dos cabezas que cambia de dirección según le convenga. Le hablan a uno amablemente y después le dicen otra cosa al gobierno. Por respeto a los líderes religiosos, se toleró a quienes los acompañaban. En 1996, dos líderes de la comunidad, Samson Okot-Ogoni y el jefe Olanya-Lagony [quien trató de mediar la paz entre el LRA y el gobierno], fueron asesinados. El LRA sintió que todos sentían antipatía hacia ellos así que se volvió muy difícil confiar en alguien.

En su rol de *riyotal* [mediación], la ARLPI le comunicaba al LRA las preocupaciones de la comunidad; que debería dejar de secuestrar a niños inocentes y ponerle fin al conflicto que estaba causándole tanto sufrimiento a la gente. ¿Cómo reaccionó el LRA antes esto?

Cuando le llegó la solicitud a Kony, él consultó con sus comandantes cercanos. Kony consulta mucho pero toma sus propias decisiones. Afirma que el "espíritu" lo está guiando y por eso nadie puede cuestionarlo. Kony llamó a la Mega FM [una emisora radial de Gulu, que transmite varios programas de paz] para discutir el secuestro de los niños y el sufrimiento de la gente. Dijo que la gente estaba enterada de la guerra en curso entre el LRA y el gobierno de Uganda, y que si ellos se exponían al peligro, el LRA no era responsable. Dijo que los soldados del gobierno eran los que estaban cometiendo la mayoría de los asesinatos y echándole la culpa al LRA. Con respecto al secuestro, dijo que el pueblo acholi estaba infectado con el mal y que era su responsabilidad crear una nueva tribu purificada.

¿El LRA estuvo de acuerdo en dialogar con el gobierno? ¿Cómo los convencieron?

El LRA siempre había querido hablar de paz con el gobierno. Aun cuando estaban combatiendo, decían que estaban combatiendo por la paz. El argumento del LRA era que el gobierno no quería la paz.

¿Observó usted algún cambio en el comportamiento o en las actividades del LRA después de sus interacciones con la ARLPI?

La posibilidad de conversar sobre la paz subió la moral en los campamentos. Creo que muchos de ellos [combatientes del LRA] se estaban cansando de pelear y cada vez estaban menos convencidos por la promesa de que el gobierno sería derrocado. Pero les daba miedo expresar sus verdaderos deseos;

temían que Kony tuviera el poder de saber cuándo hablaban de él. Se ejercía una tortura psicológica severa sobre los combatientes.

¿La iniciativa de la ARLPI tuvo alguna incidencia sobre las conversaciones de paz de Juba?

Juba era otro asunto. Tras la Operación Puño de Hierro de la UPDF [2002–05], Kony aprovechó la oportunidad para que Riek Machar [un político sudanés] contactara al Gobierno de Uganda y mediara en las negociaciones con el LRA. La ARLPI había sembrado las semillas para los diálogos de paz y el LRA aprovechó esto. Juba fue un "partido de fútbol" bien complejo. En esa época hubo muchas organizaciones en torno a Juba y yo no tengo mucho que decir sobre el papel de la ARLPI en las conversaciones mismas.

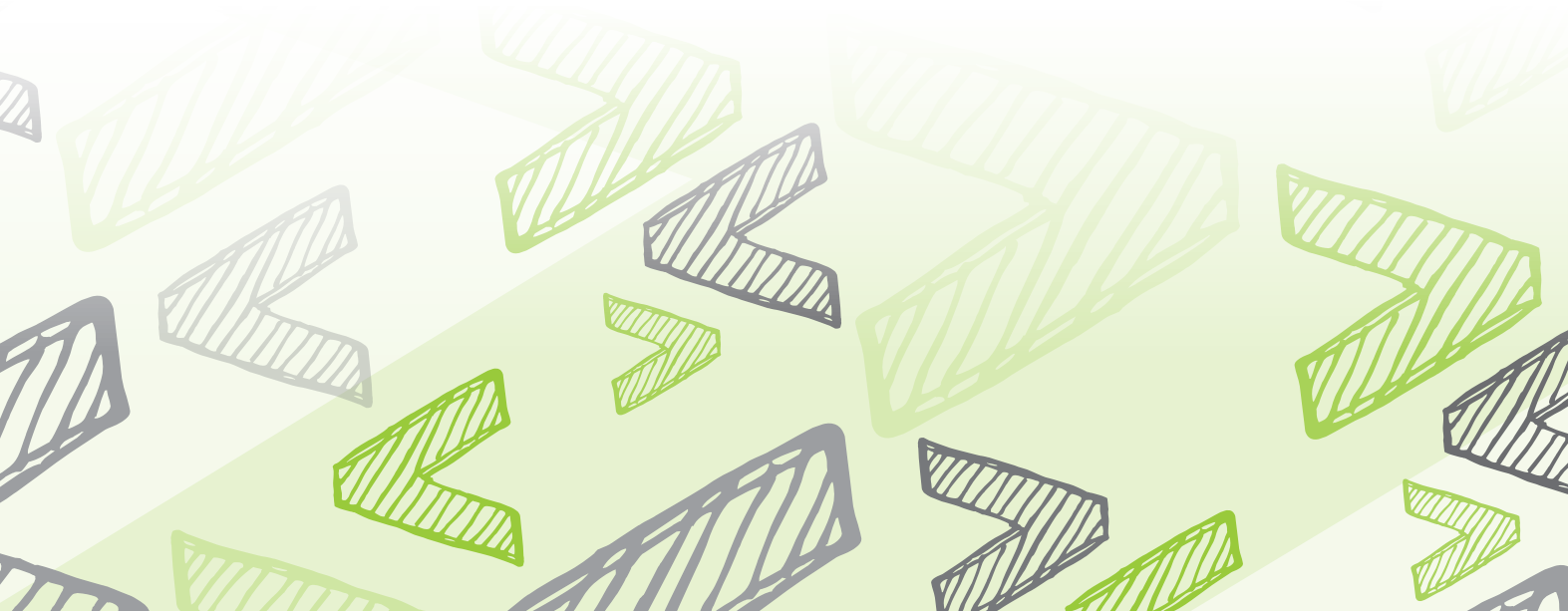
¿Los líderes del LRA querían seguir dialogando tras el fracaso de las conversaciones de Juba?

En mi opinión, el bombardeo a la base principal del LRA en el bosque de Garamba los convenció de que el gobierno no era sincero respecto de las conversaciones. Por eso hay absoluto silencio en este momento. Es necesario dialogar desde una posición de fuerza. Yo creo que el LRA no está tan fuerte como lo estaba durante las conversaciones de Juba. Quizá en el futuro, si se vuelve a fortalecer, querrá dialogar de nuevo. Muchas otras personas se sumaron al conflicto en Garamba; los americanos, los ejércitos de la República Democrática del Congo y de Sudán del Sur. Me dicen que la Unión Africana también se sumó y que la UPDF sigue persiguiendo al LRA. ¿Cuál de los lados debe participar en los diálogos con el LRA? ¿O los van a reunir a todos?

Para terminar, ¿cree usted que la ARLPI todavía puede desempeñar un papel respecto del diálogo con el LRA?

Personalmente, creo que los diálogos de paz aún pueden funcionar. Sería bueno que alguien encontrara la forma de ponerse en contacto con la más alta comandancia del LRA. Pero es muy difícil saber qué está pasando ahora en la organización del LRA. Si es cierto que están desorganizados, será difícil reiniciar conversaciones.

También es necesario tener en cuenta las razones que dio Kony para no firmar el Acuerdo de Juba. La Operación Rayos y Truenos [2008–2009] empeoró esto [falta de confianza]. ¿En quién puede confiar, especialmente ahora que hay tantas fuerzas que lo persiguen? Puede ser una buena idea que la ARLPI encuentre la forma de acercársele. Tal vez confíe todavía en ellos, como lo hizo al comienzo. Pero, como dije, es muy difícil saber lo que realmente está sucediendo al interior del LRA.



Colombia

Desminado en Micoahumado: de la resistencia civil a la negociación local con el ELN

>>

Por: Mauricio García-Durán[7] y Fernando Sarmiento Santander[8]

El 2 de febrero de 2005, los habitantes del pueblo de Micoahumado organizaron una tradicional cabalgata. Asistieron representantes de la comunidad y del Estado, así como miembros de los medios, de la Iglesia Católica, de organizaciones no gubernamentales (ONG) regionales y de la ONG internacional Geneva Call. El evento celebraba la terminación del "proceso de desminado social y comunitario" de la carretera principal, las vías secundarias y las rutas de acceso a Micoahumado, por parte del Ejército de Liberación Nacional (ELN). El pueblo, un corregimiento del municipio de Morales en el departamento de Bolívar, centro-norte de Colombia [ver mapa en la página 48], forma parte de la región geográfica del Magdalena Medio, que incluye a varios departamentos bañados por el río Magdalena, el más grande de Colombia.

El proceso —llamado también desminado humanitario— comenzó después de que la comunidad le solicitara al ELN el desminado del área y tras casi dos años de negociaciones que implicaron múltiples interacciones entre la comunidad, ONG nacionales e internacionales, los actores armados y el gobierno. Con el apoyo de actores externos, la comunidad se organizó para enfrentar a los diferentes actores armados, que incluían grupos paramilitares y guerrilleros, y negociar con ellos.

Este artículo se basa en la investigación realizada por los autores como parte de los esfuerzos del CINEP/ Programa por la Paz por documentar la experiencia de Micoahumado. El trabajo de investigación, llevado a cabo entre 2010 y 2015, incluyó varias entrevistas, dos talleres y diversos eventos de paz con la participación de líderes comunitarios y miembros de las organizaciones de apoyo.

El ELN y Micoahumado

El conflicto armado contemporáneo en Colombia comenzó en la década de los 60 con la aparición de dos grandes grupos guerrilleros: el ELN y las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia). Las otras partes principales del conflicto incluyen al Ejército Nacional y la Policía, y a los grupos paramilitares reunidos en las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Tras dos décadas de conflicto de baja intensidad, la violencia se intensificó en los años 80 y llegó a su punto máximo a finales de los 90.

En cuanto grupo marxista procubano, el ELN se inspiró en las tácticas de las guerrillas lideradas por Fidel Castro en la Sierra Maestra en los años 50. Tenía vínculos ideológicos con Cuba, así como raíces cristianas

7 Mauricio García-Durán es sacerdote jesuita y actual Director Ejecutivo del Servicio Jesuita a Refugiados (JRS), Colombia. Lleva 25 años investigando los procesos de paz y las movilizaciones sociales a favor de la paz en Colombia. Adicionalmente, ha trabajado con las poblaciones desplazadas para el Centro de Investigación y Educación Popular/ Programa por la Paz (CINEP/ PPP), del cual fue Director Ejecutivo entre 2007 y 2012. Fue el editor del número 14 de *Accord: Alternativas a la guerra – Iniciativas y procesos de paz en Colombia* (2004).

8 Fernando Sarmiento Santander es investigador de iniciativas de paz en el CINEP/PPP, donde actualmente coordina el Equipo de Ciudadanía, Desarrollo y Paz. Desde 1997, se ha enfocado en las movilizaciones a favor de la paz en Colombia, especialmente en gestión social, participación política, resolución de conflictos y derecho internacional humanitario. También tiene experiencia en el fortalecimiento de las iniciativas locales para la construcción de paz.

inspiradas en la teología de la liberación y las nociones de justicia social. Varios sacerdotes y actores religiosos han pertenecido al ELN, tales como el Comandante General Manuel Pérez (también conocido como El Cura Pérez), y Camilo Torres, quien había participado en movimientos socialistas antes de unirse al ELN en 1965. En su mejor momento, durante los años 90, el ELN tenía entre 3.000 y 5.000 miembros aproximadamente; en 2015, se calcula que tenía entre 1.500 y 2.000.

La mayor intensificación de la violencia en Colombia coincidió con las negociaciones entre el gobierno y las FARC entre 1999 y 2002. Mientras las conversaciones de paz se desarrollaban en la zona desmilitarizada de El Caguán, en el sur del país, el conflicto armado se intensificó en el norte. Durante este período los paramilitares concentraron sus esfuerzos en atacar las áreas controladas por el ELN en el Magdalena Medio, que comprendían pueblos como Micoahumado, ubicado en la Serranía de San Lucas.

Dada su ubicación central y riqueza en recursos naturales, la Serranía de San Lucas se convirtió en una de las regiones más disputadas del país, especialmente después de la ampliación de la Troncal del Magdalena Medio, que conectaba el centro y el norte del país.

Históricamente, el Estado ha brillado por su ausencia en la región, con poca provisión institucional de agua, educación o servicios de salud. El ELN, en muchos casos con el apoyo de la población, mantuvo el control social y militar de varios municipios y corregimientos de la Serranía de San Lucas y el Magdalena Medio. Las comunidades y los grupos armados desarrollaron relaciones estrechas, y muchos guerrilleros tenían lazos personales con los habitantes, como miembros de la familia, amigos o vecinos. Por ello, la comunicación directa entre la comunidad y el ELN era posible normalmente, aunque la comunidad tendía a dirigirse a la Iglesia para que ayudara a resolver disputas.

La región tiene también un significado político, militar e histórico especial para el ELN ya que fue una de las áreas principales donde el grupo se reconstruyó en los años 80 tras haber sido devastado militarmente en los años 70. En ese momento, el grupo extendió su uso de minas antipersonal para defender su territorio.

> "Los elenos (ELN) han jugado un papel fundamental en la vida cotidiana de la región. Ayudaron a construir los caminos y las carreteras, así como la cancha de fútbol, el centro de salud y los colegios con su propia maquinaria. También defendieron a la población local de la arremetida paramilitar, que habría sido peor sin su protección."
> *Entrevista con un líder comunitario, 2010.*

Hubo dos ciclos de conflicto armado intensificado en Micoahumado. De 1985 a 1995, el ejército llevó a cabo operaciones de contrainsurgencia esporádicas en el pueblo. La población fue estigmatizada como simpatizante de la guerrilla y padeció una serie de medidas represivas. Luego, entre 1998 y 2003, hubo una disputa territorial entre el Bloque Central Bolívar (BCB) de las AUC y el Frente José Solano Sepúlveda del ELN. Como parte de su estrategia amplia para adquirir el control territorial del sur de Bolívar, los paramilitares emprendieron una serie de ataques para establecer bases de operaciones en varios municipios y pueblos de la región.

Entre 1998 y 2002, Micoahumado fue objeto de una serie de ataques por parte de los paramilitares, quienes buscaban quitarle el control de la zona al ELN. En el momento más álgido del combate en 2001 y 2002, la comunidad local comenzó a organizarse en respuesta a la brutalidad de la violencia paramilitar. El BCB atacó a la población civil con el fin de llegar a las guerrillas, a menudo con el consentimiento tácito del ejército. Muchas familias y la mayor parte de los líderes comunitarios tuvieron que abandonar sus hogares por miedo a ser tachados de a cómplices de las guerrillas.

El 2 de diciembre de 2002, el BCB lanzó su ataque más severo. La población se vio atrapada por el fuego cruzado entre los paramilitares y el ELN. El bloqueo de las carreteras limitó el acceso a los alimentos, la asistencia médica y el agua potable, pues las dos partes intentaban atrincherarse en el pueblo. Los paramilitares se instalaron en el colegio, los campos deportivos y otros espacios públicos, así como en las casas de familia.

El ELN minó las rutas de suministro de agua para obligar a la población a irse para que ellos pudieran enfrentar directamente a los paramilitares.

La comisión de diálogo de la comunidad

En última instancia, la adversidad y la violencia en Micoahumado llevaron a la organización comunitaria. La comunidad parecía enfrentarse a un dilema: o se unían a uno de los dos grupos, involucrándose directamente en la confrontación; o se oponían a los dos, provocando, casi seguramente, así su propio desplazamiento. Pero optaron por una tercera alternativa: declarar su "desobediencia civil"; negándose a apoyar a ninguno de los dos actores armados, asumiendo una posición de no violencia y defendiendo una propuesta de paz, convivencia y seguridad.

El 14 de diciembre de 2002, los habitantes de Micoahumado y representantes de la Iglesia Católica local celebraron una reunión en la cancha de fútbol del pueblo. El nuevo sacerdote de la Diócesis de Magangué, Joaquín Mayorga, y el Director del Programa de Paz y Desarrollo del Magdalena Medio (PDPMM), Francisco De Roux, quienes habían empezado a prestarle apoyo a Micoahumado, también estuvieron presentes.

Los participantes votaron a favor de quedarse en el pueblo en lugar de abandonarlo, como había sucedido anteriormente. La asamblea eligió una comisión de diálogo integrada por ocho a diez personas, con representación igualitaria de hombres y mujeres. Su misión era hablar con los paramilitares y los guerrilleros para resolver asuntos tales como el tráfico de drogas y el desminado. Puesto que muchos líderes comunitarios anteriores habían sido acusados de colaborar con el ELN y obligados a irse, era vital que la nueva comisión permaneciera anónima. Al mismo tiempo, cada comisionado tenía que ser un miembro activo de la comunidad; un pastor evangélico o docente, por ejemplo.

> "La comunidad parecía enfrentarse a un dilema: o se unían a uno de los dos grupos, involucrándose directamente en la confrontación; o se oponían a los dos, provocando, casi seguramente, su propio desplazamiento. Pero optaron por una tercera alternativa."

La primera ronda de negociaciones comenzó en medio de la confrontación armada. La comisión inició contacto con el ELN a través de los milicianos presentes en el pueblo y convocaron a una reunión con los comandantes guerrilleros apostados en las montañas.

Los paramilitares se alejaron del centro del pueblo y se ubicaron en los montes vecinos. No obstante, según uno de los líderes comunitarios, fue en ese momento que "comenzó el peor combate".

La violencia intensa se prolongó a lo largo de la Navidad y el Año Nuevo de 2002, "lo cual nos mantuvo encerrados en nuestras casas desde el 24 hasta el 31 de diciembre. No podíamos ni asomar la cabeza." Después de esto, la comisión negoció con los paramilitares su retiro de Micoahumado y continuó dialogando con el ELN para que protegiera a la población del fuego cruzado. "El 17 de enero [2003], los paramilitares se retiraron con 150 hombres, tras haber llegado con 600 [...] después de eso, nunca regresaron" *(Entrevista con un líder comunitario, 2010)*. El ELN regresó a Micoahumado para mantener el control sobre el área.

Los relatos de los líderes comunitarios hacen evidentes los riesgos que implicaba dialogar con las dos partes en medio de la confrontación armada. Tenían que ser directos y claros con cada una de las partes y recalcar la unidad y determinación de la comunidad. Aunque tanto el ELN y los paramilitares aceptaron de manera general la propuesta comunitaria de que evitaran involucrar a la población en la confrontación, no fue constante la adhesión a ella y dependía de los intereses estratégicos de los actores armados respecto de su adversario en ciertos momentos.

No obstante, con el retiro de los paramilitares, el ejército intensificó su agresión en contra de la población. La comunidad insistió en que los guerrilleros respetaran los acuerdos previos de no involucrar a la población en la confrontación. El ELN aceptó y disminuyó su presencia.

Alentada por este avance, el 14 de marzo de 2003 la comunidad creó la Asamblea Popular Constituyente de Micoahumado como espacio humanitario para "la vida y la paz". La Asamblea representaba la totalidad del territorio; en las semanas anteriores, se habían seleccionado 100 delegados de todos los pueblos del corregimiento para formar parte de ella.

> "Los relatos de los líderes comunitarios hacen evidentes los riesgos que implicaba dialogar con las dos partes en medio de la confrontación armada. Tenían que ser directos y claros con cada una de las partes y recalcar la unidad y determinación de la comunidad."

Los líderes comunitarios cuentan que al comienzo los guerrilleros se mantuvieron firmes en su posición respecto de las minas: "no las podemos retirar porque son lo que nos protege". Los líderes comunitarios insistieron en que ellos habrían aprendido del ELN cómo hacerle exigencias al Estado y que ahora ellos le debían hacer exigencias al ELN.

La Asamblea se convirtió en la estructura organizativa principal de la comunidad, responsable de todas las decisiones importantes. Ratificó la comisión de diálogo y creó otras comisiones para que se hicieran cargo de otros problemas de la comunidad. La Asamblea se reunió para preparar los diálogos con los grupos armados, definir los temas principales que debería abordar la comisión y establecer los criterios para que la comisión tomara decisiones de manera autónoma durante las conversaciones. Después de cada ronda, se discutían los resultados de los diálogos y la Asamblea los ratificaba.

La Asamblea trabajó colectivamente y ninguno de sus miembros ejercía más poder que otro. La dimensión religiosa estuvo siempre presente; las reuniones comenzaban con una lectura de la Biblia y una oración ecuménica. La consigna que impulsaba tanto a la asamblea como a la comisión era la siguiente: "En defensa de un territorio para la vida, sin coca, sin operaciones militares, sin minas, con autonomía y libertad". El asunto del desminado era central en sus diálogos con el ELN.

El inicio del desminado

La segunda ronda de negociaciones entre las comunidades y los elenos se enfocó en el desminado y se llevó a cabo a lo largo de 2003–2004, en momentos específicos y bajo condiciones específicas. Un enviado de la guerrilla le anunciaba a la comisión cuándo podía subir al monte a hablar, y la comunidad les avisaba de inmediato a los padres de Roux y Mayorga, quienes acompañaban a la comisión.

El 28 de diciembre de 2004, tras dos años de esfuerzos prolongados y negociaciones con la comisión de diálogo, el Comité Central del ELN anunció, a través del Frente Luis Solano Sepúlveda, su decisión de desminar, de manera unilateral, algunas carreteras clave: desde el centro urbano del municipio de Morales hasta el corregimiento de Micoahumado, y desde allí hasta los pueblos de La Caoba y La Guácima, así como otras vías secundarias y caminos. El ELN también aceptó:

1. No entrar al pueblo uniformados y armados.
2. Devolver los bienes que le habían quitado a la comunidad como castigo; tierras, ganado y herramientas de trabajo.
3. Suspender los secuestros y las retenciones.
4. No volver a minar el territorio.

Ya el 20 de enero de 2005 se consideró que era seguro transitar por el territorio. Este suceso fue un hito histórico para Micoahumado. Gran parte de la comunidad participó en la verificación del proceso de desminado, dado que no hubo verificación técnica ni por parte del gobierno ni por parte de las ONG nacionales o internacionales.

El compromiso de la comunidad de Micoahumado con la imparcialidad respecto de los diferentes actores armados y su negativa a colaborar con ninguno de los grupos fueron clave para que el ELN estuviera dispuesto a aceptar y cumplir con la solicitud de desminado. El ELN reconoció que su propia seguridad se debía en gran parte a la decisión de la población de no denunciar al grupo ni apoyar a otros actores armados.

Apoyo nacional e internacional

Desde la intensificación del conflicto en 1998, la ley colombiana considera ilegal el diálogo con grupos armados específicos, entre ellos el ELN y las FARC, sin la autorización del Estado. Sin embargo, el Estado aceptaba los "diálogos pastorales", mediante los cuales miembros de la Iglesia Católica (obispos y sacerdotes) se dirigían a los grupos guerrilleros y paramilitares para garantizar una mínima seguridad para las comunidades o para mediar en la liberación de víctimas del secuestro. Los diálogos pastorales, realizados por la Iglesia en todo el país, brindaron un canal indirecto para el diálogo y ejercieron influencia sobre todos los grupos.

Cuando los miembros de la comisión de diálogo de Micoahumado iniciaron conversaciones con el ELN, le pedían a un sacerdote que los acompañara para que estuvieran "amparados" por la disposición relativa al diálogo pastoral. La presencia de los líderes religiosos en momentos de feroces confrontaciones entre el ELN y las AUC también les brindó seguridad inmediata a los miembros de la comisión respecto de ataques por parte de los grupos armados. El padre de Roux y las Diócesis desempeñaron un papel de mediación crítico y coordinado en el avance del diálogo con el ELN y ayudaron a presentarles claramente a los guerrilleros las exigencias de la comunidad. También coordinaron misiones de paz a Micoahumado en febrero de 2003 para capacitar y fortalecer a la Asamblea y las comisiones de diálogo, con el apoyo de REDEPAZ (Red Nacional para la Paz).

Las organizaciones nacionales también fueron importantes para apoyar y llamar la atención sobre la iniciativa de diálogo. Entre ellas se encontraban las redes nacionales de iglesias; grupos humanitarios y de derechos humanos tales como la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (CREDHOS), la Campaña Colombiana contra Minas, y la Organización Femenina Popular (OFP), así como las entidades estatales regionales como la Defensoría del Pueblo del Magdalena Medio, la administración local de Morales y la administración regional de Bolívar.

Los organismos internacionales brindaron un apoyo similar al destacar el asunto y avalar la iniciativa, entre ellos el Comité Internacional de la Cruz Roja International y la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados. Geneva Call, una organización comprometida con el acercamiento a los grupos armados no estatales para mejorar la protección de los civiles, desempeñó un papel secundario pero importante al ofrecer asesoría técnica y alentar al gobierno para que permitiera el proceso. Propuso el desminado conjunto por parte de la guerrilla y las fuerzas armadas, pero éstas últimas rechazaron la propuesta.

> "Tras un viaje de dos días nos reunimos con los guerrilleros el 17 de diciembre de 2002, sin que lo supieran los paramilitares. En La Guácima nos dijeron: 'desminaremos el suministro de agua, dejaremos entrar alimentos, pero con la condición de que los "paras" abandonen el centro del pueblo'. Luego la misma comisión decidió hablar con los paras y éstos decidieron aceptar". *Entrevista con un líder comunitario, 2010*

Caribbean Sea
Barranquilla
Caracas
PANAMA
VENEZUELA
Magdalena
Medio
region
Bucaramanga
Barrancabermeja
Medellin
North
Pacific
Ocean
Rio Magdalena
Bogotá
COLOMBIA
Micoahumado
Morales
CESAR
DEPARTMENT
Morales
Municipality
Mountains of
San Lucas
SANTANDER
DEPARTMENT
Magdalena
Medio
Highway
BOLIVAR
DEPARTMENT
Barrancabermeja
ECUADOR
BRAZIL
PERU
International boundary
National capital
0 100 200 Kilometres
0 100 200 Miles

La falta de reconocimiento estatal

Uno de los aspectos más difíciles del proceso de desminado fue la relación de los líderes de Micoahumado y el Estado colombiano. Hacia finales de 2003, la comisión de diálogo viajó a Bogotá para informarle al Vicepresidente y al Comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo, del asedio del cual eran objeto por parte del ejército. El gobierno rechazó la solicitud de apoyo oficial de la comunidad porque, tal como señaló el Comisionado de Paz, el ELN seguía plantando minas en otras partes del país.

Así mismo, el ejército cuestionó el compromiso del ELN con el desminado y sembró dudas respecto de la imparcialidad de la comunidad. El ejército siguió acosando a la población. No obstante, las unidades específicas del ejército presentes en el área permitieron las actividades de desminado del ELN siempre y cuando no interfirieran con las operaciones militares.

> “Frente a los altos niveles de violencia e inseguridad, el proceso de Micoahumado empoderó a la población e ilustró un enfoque de abajo hacia arriba para la construcción de paz con amplia participación social.”

El director del Observatorio Nacional de Minas Antipersonal reconoció la importancia del proceso y la necesidad de brindar apoyo técnico para la verificación, pero no podía contravenir las decisiones del gobierno. La solución del Estado fue la de brindar apoyo no oficial sin otorgar una certificación administrativa para las actividades de desminado; esto volvió más complejo y difícil el proceso, aunque, paradójicamente, lo hizo más autónomo y sostenible en el largo plazo.

La reacción del gobierno sugiere que, a nivel nacional, la lógica del conflicto armado determinaba las decisiones institucionales y socavaba la capacidad de los actores locales para promover la paz y la seguridad en sus comunidades. El papel potencial del Estado se vio limitado también por la desconfianza del ELN respecto de la participación oficial en el proceso. El grupo insistió en llevar a cabo el desminado por sí mismo y no permitió el acceso de las fuerzas armadas a la zona.

> “La población local insistió en describir sus interacciones con el ELN como “diálogos sociales y pastorales”, resaltando que sus acciones se realizaban independientemente de cualquier grupo armado y que contaban con el apoyo de la Iglesia.”

Frente a estas tensiones, la población local insistió en describir sus interacciones con el ELN como “diálogos sociales y pastorales”, resaltando que sus acciones se realizaban independientemente de cualquier grupo armado y que contaban con el apoyo de la Iglesia. Con el fin de evitar el lenguaje oficial e internacional, la comunidad se refirió al proceso como un “desminado social y comunitario” en vez de “desminado humanitario”. Su objetivo era hacer énfasis en un proceso de abajo hacia arriba que se había llevado a cabo tras la negativa de apoyo oficial.

Impacto sostenido del modelo de Micoahumado

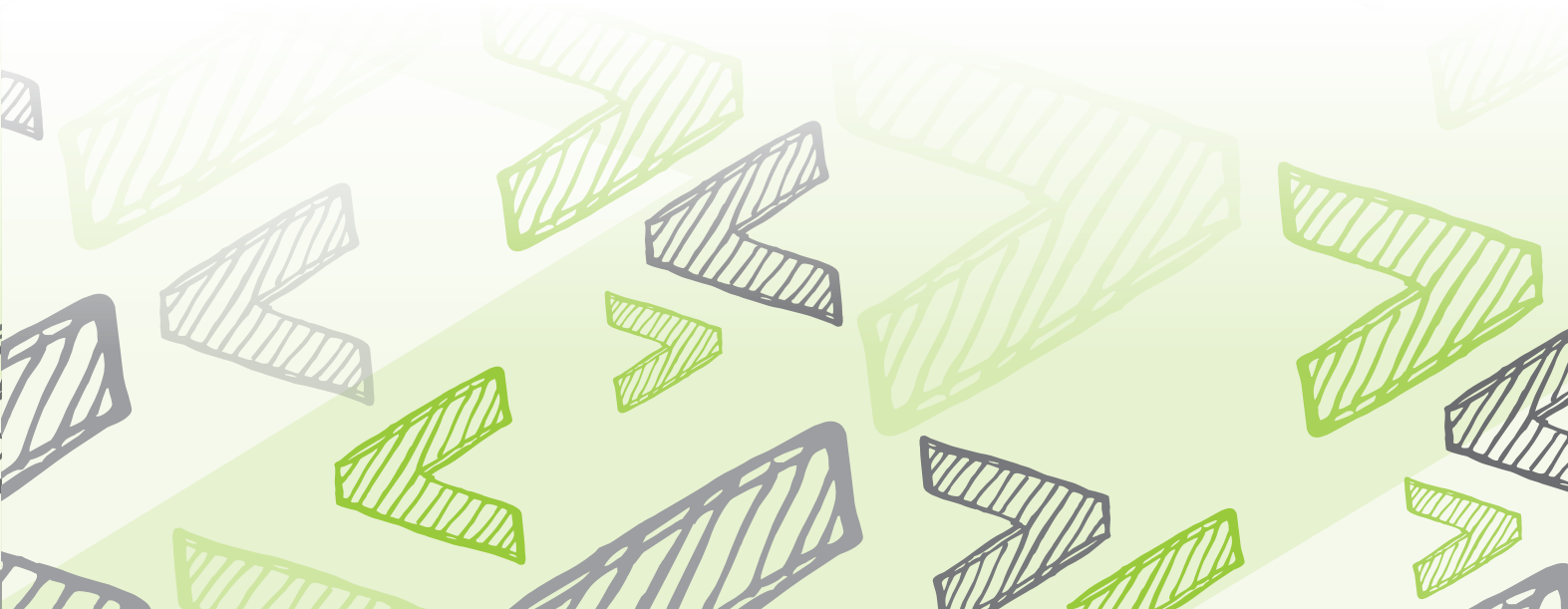
Frente a los altos niveles de violencia e inseguridad, el proceso de Micoahumado empoderó a la población e ilustró un enfoque de abajo hacia arriba para la construcción de paz con amplia participación social. La organización social de la comunidad (la Asamblea Popular Constituyente) se desarrolló como un mecanismo efectivo para la resolución de conflictos. Algunos activistas a favor de la paz han calificado la experiencia de Micoahumado de proceso de desminado para “la vida y el desarrollo”. Permitió, por ejemplo, la comunicación y el transporte entre distintas partes del municipio y la reanudación de la actividad económica, incluido el cultivo de productos agrícolas y su exportación de la región. No ha vuelto a haber confrontaciones armadas en el pueblo desde 2005.

La experiencia de Micoahumado tuvo un significado simbólico para otras iniciativas de paz. Por ejemplo, algunos miembros de la comunidad de Micoahumado compartieron experiencias con sus contrapartes en Samaniego

(departamento de Nariño), y luego, representantes de Samaniego viajaron a La Habana, Cuba, durante las conversaciones exploratorias entre el ELN y el gobierno colombiano para discutir el desminado de sus territorios.

Entre los factores clave para el desarrollo y el sostenimiento de la iniciativa estaban la capacidad para mantener el impulso en medio del conflicto armado continuado y la negativa a hacer concesiones a los grupos armados. La comunidad también aprendió la importancia del apoyo externo, dado que la política del gobierno le daba prioridad a los objetivos estratégicos nacionales por encima de las necesidades locales. La comunidad necesitaba el apoyo de organizaciones regionales, nacionales e internacionales para fortalecer su capacidad de negociar tanto con el gobierno como con los grupos armados "ilegales". Sobre todo, era esencial que la comunidad fuera coherente en sus interacciones con los diferentes actores para mantener la confianza y la legitimidad de sus diálogos.

El desminado es un problema clave en las discusiones formales de negociación en el país. Ha sido uno de los temas principales en las conversaciones de La Habana entre las FARC y el gobierno colombiano, como una forma de disminuir el enfrentamiento armado. Es probable que también se destaque en cualquier conversación entre el ELN y el gobierno. La sociedad civil colombiana ha sido explícita en que este tema se discuta en la mesa y ha estado propugnando que se la incluya en cualquier proceso de desminado que se lleve a cabo. Si bien el desminado puede servir de medida que construye la confianza entre las partes en conflicto, el desminado como proceso también reconoce los efectos de la violencia sobre la población y su papel en la superación del conflicto. La participación de las comunidades locales será crucial para garantizar que un acuerdo de paz goce de un amplio apoyo social y se pueda implementar en la práctica, así como para asegurar que las estrategias de construcción de paz en el posconflicto sean factibles.



Cuando Irlanda se dividió en 1921, Irlanda del Norte siguió siendo parte del Reino Unido. La mayoría protestante que vivía allí era por lo general partidaria de permanecer en el Reino Unido (unionistas), mientras que la minoría católica se consideraba irlandesa y muchos de ellos aspiraban a una Irlanda unida (nacionalistas). El Estado de Irlanda del Norte se caracterizaba por la discriminación sectaria estructural y la manipulación política de las circunscripciones electorales para minimizar el voto nacionalista, así como por "Poderes Especiales" draconianos que se utilizaban casi exclusivamente sobre la población minoritaria.

Hacia finales de los años 60, la policía respondió con violencia ante una manifestación pacífica a favor de los derechos civiles en la que participaban tanto unionistas como nacionalistas, y en agosto de 1969 fueron desplegadas tropas británicas para intentar mantener el control. Hubo también un rápido incremento de la actividad paramilitar por parte del Ejército Republicano Irlandés (IRA), nacionalista, y la Fuerza de Voluntarios del Ulster (UVF), unionista —denominados como 'republicanos' y 'leales al régimen', respectivamente, para distinguirlos de los movimientos nacionalistas y unionistas no violentos— y durante los 30 años siguientes Irlanda del Norte se vio aquejada por la represión, la hostilidad y la violencia. Los grupos armados cometieron atroces actos de violencia contra los civiles y el Estado recurrió al encarcelamiento sin juicio previo, y organizó y autorizó la tortura y las ejecuciones extrajudiciales.

Los grupos paramilitares leales al régimen y republicanos anunciaron un cese de las hostilidades en 1994, y aunque el cese al fuego del IRA se suspendió en 1996, se restableció en 1997. Las conversaciones entre las múltiples partes se iniciaron ese mismo año e incluyeron al ala política del movimiento republicano, Sinn Féin, y a representantes de los grupos armados leales al régimen. Las negociaciones condujeron al Acuerdo de Belfast o Acuerdo del Viernes Santo, como también se le conoce, en 1998. El acuerdo le delegó la reforma de la Gendarmería Real del Ulster (RUC) a una comisión independiente, lo cual produjo enormes cambios en la composición y vigilancia del nuevo cuerpo policial, el Servicio de Policía de Irlanda del Norte (PSNI).

Durante el conflicto, tanto las comunidades republicanas como aquellas leales al régimen desconfiaban de la RUC, que ingresaban a las áreas republicanas solamente para operaciones relacionadas con el conflicto. Ambas comunidades, por el contrario, favorecían la "vigilancia comunitaria" por parte de los grupos armados, que dependían en gran medida de la violencia punitiva para suprimir lo que ellos consideraban como comportamiento antisocial.

El siguiente artículo presenta una reflexión de primera mano sobre los esfuerzos de la sociedad civil activista por acercarse a los grupos armados en los años 90 con el fin de promover enfoques alternativos a la violencia punitiva, los cuales llegaron a conocerse como justicia restaurativa comunitaria. Inicialmente, esto se hizo a través de una organización no gubernamental local, la Asociación para la Atención y Reinserción de Agresores de Irlanda del Norte (NIACRO). No obstante, mientras que los leales al régimen aceptaban por lo general esta intervención, los republicanos mostraron bastante reticencia en un comienzo. Un activista de la sociedad civil que participó en este proceso explora la forma en que el movimiento republicano se abrió a la posibilidad de los enfoques de justicia restaurativa y reflexiona sobre el impacto más amplio de la iniciativa.

Irlanda del Norte

De la violencia punitiva a la justicia restaurativa en Irlanda del Norte

>>

Por Brian Gormally[9]

La justicia restaurativa, una perspectiva desde la sociedad civil

A mediados de los años 90 e incluso después de los ceses al fuego de 1994, prevalecía la "violencia punitiva" tanto en las comunidades republicanas como en las leales al régimen en Irlanda del Norte. Esto se debía en parte a: una brecha percibida en cuanto a labor policial, especialmente en las comunidades republicanas; el deseo de los grupos armados de servirle a la comunidad cerrando esa brecha; la presión de las comunidades para que se hiciera algo respecto del comportamiento antisocial y los delitos más serios, y la percepción de que los delincuentes jóvenes eran utilizados como informantes por las fuerzas estatales y que éstas a su vez alentaban el consumo y el tráfico de drogas como medida de contrainsurgencia encaminada a destruir a las comunidades.

> "NIACRO reclutó a un antiguo prisionero condenado a cadena perpetua para que consultara con los activistas comunitarios y los grupos armados en las áreas oficialistas acerca de una alternativa a la violencia punitiva que fuera aceptable para la comunidad."

La violencia punitiva iba desde la humillación pública (alquitranar y emplumar) a la mutilación ("disparo a las rodillas" y a menudo mutilación de varios miembros) y la ejecución. No obstante, en los años 90, tanto antes como después de los ceses al fuego, los grupos armados buscaron reducir su participación en ese tipo de actos. La razón para ello fue el impacto político negativo de la práctica a pesar de su popularidad local, la exposición de sus militantes a la posible identificación o arresto, y el disgusto generalizado de la tropa; entre ellos las unidades encargadas de llevar a cabo los castigos.

La Asociación para la Atención y Reinserción de Agresores de Irlanda del Norte (NIACRO), una importante organización no gubernamental establecida en 1968 para "trabajar por el bienestar del agresor" y proveer servicios para ayudar a prevenir el crimen y rehabilitar a los agresores no políticos, consideró que existía la posibilidad de alternativas pacíficas a la violencia punitiva a través de la mediación y la justicia restaurativa. Por justicia restaurativa se entienden las medidas surgidas de la comunidad diseñadas para aliviar el daño causado por el crimen mediante la aceptación de responsabilidad por parte del agresor, la reparación y la reintegración a la comunidad. Debe ser exclusivamente pacífica y voluntaria.

La NIACRO, además de recibir fondos del Estado y mantener una buena relación de trabajo con los organismos oficiales, estaba bien establecida en muchas comunidades locales donde trabajaba con los jóvenes y los grupos armados. También trabajaba con las

9 Brian Gormally es el Director del Comité para la Administración de la Justicia, una ONG de derechos humanos en Irlanda del Norte. Anteriormente, fue Director Adjunto de la Asociación para la Atención y Reinserción de Agresores de Irlanda del Norte (NIACRO) durante 25 años, así como asesor independiente principalmente en el sector comunitario y de voluntariado, especializado en justicia, vigilancia comunitaria y derechos humanos. También ha realizado trabajo internacional relacionado con la paz en Sudáfrica, Israel/Palestina, el País Vasco y Colombia.

familias con los miembros de grupos armados políticos que estaban encarcelados, algunos de los cuales eran puestos en libertad condicional.

Acercamiento a los grupos armados

Base 2, uno de los proyectos de NIACRO que se inició a comienzos de la década de 1990, le ayudaba a quienes estaban amenazados de violencia por parte de los grupos armados y mantenía contacto con estos con el fin de determinar el nivel real de peligro para estos individuos. El proyecto brindaba un servicio de verificación y mediación para ayudarles a los individuos a permanecer en sus hogares, o les proporcionaba apoyo práctico para una reubicación segura en otra área. Por ello, ya para mediados de los 90, la asociación gozaba de un razonable nivel de credibilidad con los grupos armados, y al mismo tiempo mantenía vínculos positivos con las agencias gubernamentales y sus funcionarios, quienes habían aceptado, por ejemplo, el hecho de que Base 2 tuviera que negociar confidencialmente con los grupos armados para minimizar la violencia.

En 1996, con el deseo de acercarse a los grupos leales al régimen, NIACRO reclutó a un antiguo prisionero condenado a cadena perpetua para que consultara con los activistas comunitarios y los grupos armados en las áreas oficialistas acerca de una alternativa a la violencia punitiva que fuera aceptable para la comunidad. No hubo diálogo directo entre el personal de NIACRO y los grupos armados. En el informe que esbozaba los resultados de las consultas, se propusieron todos los elementos relevantes de la justicia restaurativa, a pesar de que en ese entonces el término no se utilizaba ampliamente en Irlanda del Norte. Este proceso llevó finalmente a la creación de un movimiento a favor de la justicia restaurativa llamado "Alternativas" en las comunidades afectadas por la violencia paramilitar de los leales al régimen.

El acercamiento al movimiento republicano fue más complicado. Un intento inicial en 1996 fracasó, posiblemente porque el movimiento republicano no estaba dispuesto a colaborar, en el caso de un tema sensible, con una iniciativa que no se había originado en sus propias filas. No obstante, poco después de eso, algunos miembros del movimiento republicano se pusieron en contacto con funcionarios específicos de NIACRO a través de un intermediario de confianza; un empleado de NIACRO, excombatiente y víctima de tortura estatal. Esto llevó al diálogo directo entre activistas de la sociedad civil y republicanos involucrados en labores de "vigilancia" y violencia punitiva. Los altos mandos del movimiento se mantuvieron informados.

En este diálogo se discutieron el "espectro de legitimidad" (la medida en que los elementos del debido proceso y la proporcionalidad afectaban la legitimidad del castigo informal) y la capacitación en derechos humanos y principios de justicia restaurativa. También se compartieron lecciones comparadas provenientes de otros contextos; las poblaciones aborígenes en Australia y el proceso transicional en Sudáfrica.

Se consideró que el diálogo con el movimiento republicano era más delicado desde el punto de vista político y no fue un proyecto oficial de NIACRO. Participaron cuatro activistas de la sociedad civil que habían sido empleados de NIACRO, pero, en ese momento, uno era académico y el otro trabajaba con una ONG de derechos humanos. No hubo negociación formal con el movimiento republicano respecto de quiénes debían participar, pero aquellos que decidieron hacerlo eran conocidos por las comunidades republicanas debido a su trabajo previo y les tenían confianza.

La aceptabilidad no implicaba simpatía con los objetivos o tácticas del movimiento, pero sí que éste pudiera confiar razonablemente en que la información de las reuniones no iba ser divulgada a las autoridades y que los encuentros no se utilizarían de manera negativa en el sentido político. La identidad sectaria no era necesariamente un problema, y la trayectoria laboral de los individuos participantes sirvió para superar cualquier hostilidad. Aunque los individuos se beneficiaron del respeto que se había ganado NIACRO frente al movimiento republicano, particularmente a raíz del proyecto Base 2, a la larga lo que contaba era la confianza individual.

Se celebraron reuniones semanales en lugares e instalaciones donde los activistas republicanos se sentían seguros y en su propio terreno, lo cual culminó con una reunión de convivencia durante un fin de semana. Tras un silencio de seis meses, el movimiento republicano aceptó un informe en el que se detallaban las discusiones y se incluía un marco para el trabajo futuro, el cual fue publicado. Se inició el trabajo práctico encaminado a crear una organización que pudiera implementar prácticas restaurativas, pero el gobierno y los entonces líderes de la RUC se opusieron rotundamente, aunque los oficiales de policía de nivel medio que trabajaban sobre el terreno lo apoyaron.

¿Validación de la vigilancia parapolicial o promoción de la justicia comunitaria?

Algunos vieron el proyecto de justicia restaurativa como la aprobación de que los terroristas hicieran justicia por su propia mano; los miembros de la sociedad civil que participaban en él lo consideraban como un ejercicio de justicia pacífica y construcción de un potencial puente futuro entre las comunidades locales y la policía.

Al principio, las comunidades se mostraron un tanto perplejas ante la suspensión de las respuestas punitivas al crimen, pero pronto llegaron a aceptar los conceptos de la justicia restaurativa y hubo un alto nivel de participación voluntaria. La violencia punitiva republicana no desapareció de inmediato, aunque sí se redujo considerablemente. La condición para la participación de los activistas de la sociedad civil era que ni los mecanismos de justicia restaurativa ni ninguna de las personas involucradas tuvieran conexión alguna con la violencia.

El proyecto comenzó a colaborar con la policía en ciertos aspectos, especialmente tras el acuerdo de 1998. Esto contribuyó a disipar las sospechas de lado y lado y demostró los beneficios prácticos de la cooperación, preparando así el camino para que los republicanos apoyaran formalmente al servicio de Policía de Irlanda del Norte (PSNI).

Finalmente, el Estado aceptó la legitimidad de los proyectos y en 2007 aprobó la certificación por parte de la Inspección de Justicia Penal —uno de los nuevos mecanismos independientes de vigilancia establecidos por el Acuerdo de Belfast. Los republicanos se comprometieron a delegarle los poderes de vigilancia y justicia a la Asamblea de Irlanda del Norte. Según los republicanos y los leales al régimen, los proyectos son hoy día el método más efectivo de comunicación y cooperación entre las comunidades y la policía— y los policías son sus defensores más entusiastas.

El impacto más amplio y las condiciones para el éxito

En el largo plazo, el diálogo principalmente informal entre el proyecto de justicia restaurativa y la policía contribuyó sin duda al apoyo al PSNI por parte de Sinn Féin. Durante las negociaciones para el Acuerdo de Belfast, era evidente que la violencia punitiva no podía continuar a gran escala al mismo tiempo que los representantes republicanos decían estar buscando una vía de avance pacífica. El movimiento tuvo que ponerle fin a prácticamente toda la violencia por razones políticas, a la vez que buscaba conservar el apoyo público claro a su labor de vigilancia.

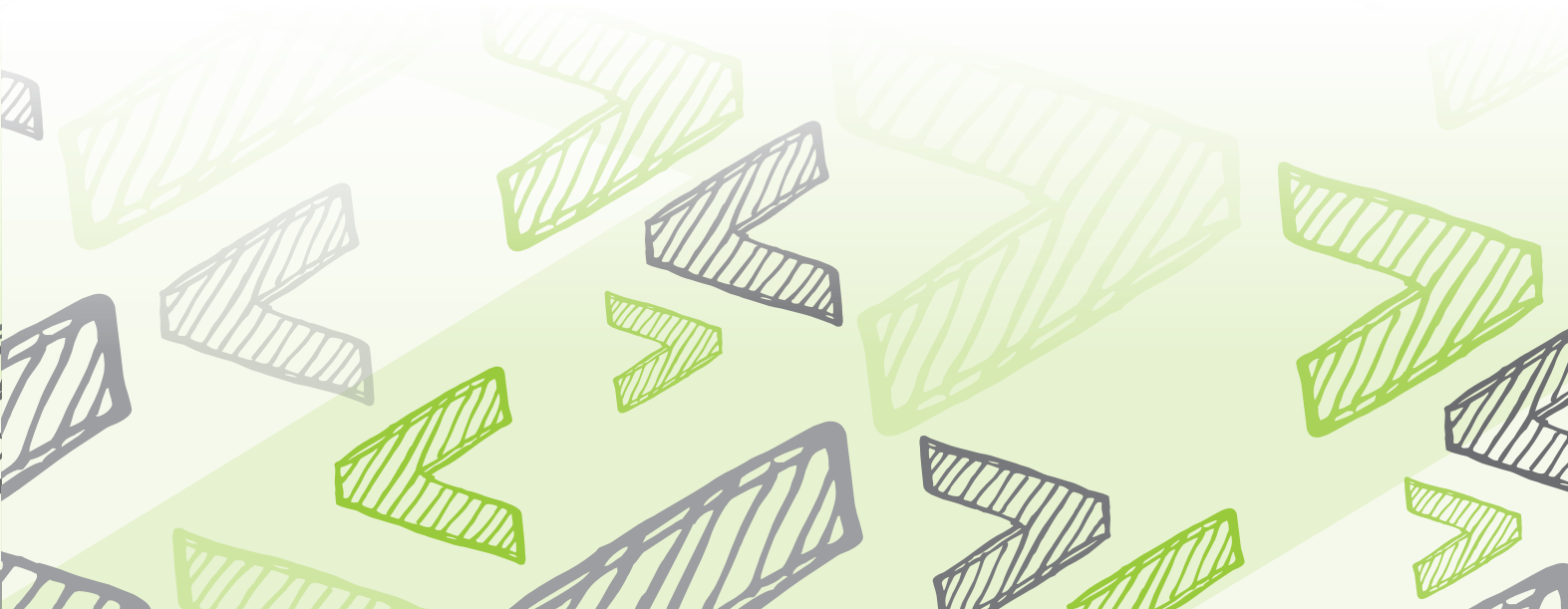
“Algunos vieron el proyecto de justicia restaurativa como la aprobación de que los terroristas hicieran justicia por su propia mano; los miembros de la sociedad civil que participaban en él lo consideraban como un ejercicio de justicia pacífica y construcción de un potencial puente futuro entre las comunidades locales y la policía.”

Varias circunstancias contribuyeron al éxito de la iniciativa con el movimiento republicano. En primer lugar, los participantes de la sociedad civil, ya sea organizados en un grupo o no, se beneficiaron de la trayectoria de trabajo relevante (en el caso del autor y de sus colegas, el trabajo con las familias de los prisioneros y con los exprisioneros), de la ausencia de un involucramiento político evidente o de un sesgo percibido, y de los lazos que tenían con la sociedad civil más amplia y el Estado, así como de la credibilidad de la cual gozaban. Los participantes en

la iniciativa también tenían algo que ofrecerle al grupo armado, a saber, una nueva perspectiva, conocimientos, contactos y capacitación: ellos entendían y eran conscientes de las posiciones tanto de los grupos armados y del Estado en cuanto combatientes en un conflicto, y por ello podían servir de "traductores" entre los dos.

En segundo lugar, fue muy útil que el intermediario de confianza, quien desempeñó un papel clave en iniciar y mantener el diálogo entre el grupo y la sociedad civil, no tuviera que demostrarle nada al grupo armado (en este caso, por ser exprisionero y excombatiente), y no estuviera involucrado en el conflicto en ese momento; no estaba sometido a la disciplina del grupo armado y le había demostrado credibilidad a la organización de la sociedad civil.

Finalmente, no es usual que ese tipo de diálogos sean exitosos a menos que ya hayan empezado a surgir las condiciones más amplias para un proceso de paz. Entre estas estaban el reconocimiento de todas las partes de que la victoria militar era poco probable, si no imposible, los avances hacia un cese al fuego por parte de los grupos armados, algunas perspectivas de participación política para los excombatientes y la posibilidad de una reforma que incluyera la reforma de las instituciones políticas y de seguridad.



Siria

La interacción entre civiles y grupos armados en el conflicto sirio

>>

Por Wisam Elhamoui[10] y Sinan al-Hawat[11]

El conflicto ha devastado a Siria desde 2011, cuando el régimen del presidente Bashar al-Assad respondió con severidad a las manifestaciones prodemocráticas en todo el país. Algunos manifestantes comenzaron a armarse y cuando se intensificó el combate, el país quedó sumido en la guerra civil. El movimiento de protesta pacífica fue aplastado por los enfrentamientos violentos entre el régimen sirio y sus milicias leales y las fuerzas que se oponían al gobierno de Assad. Los civiles y los grupos de la sociedad civil han luchado desde entonces por expresar sus puntos de vista e intereses frente a las múltiples facciones armadas.

La rebelión armada ha evolucionado de manera significativa desde finales de 2011. Al comienzo, el Ejército Libre Sirio (FSA), una coalición informal de grupos opuestos al régimen, desempeñó un papel destacado en las operaciones militares. Hoy día, combate en Siria una proliferación de grupos armados independientes con formas de organización y objetivos declarados bien diferentes; se calcula que podría haber hasta 1.000, entre ellos, los restos locales del FSA, grupos de convergencia tales como el Frente Islámico y el Frente Islámico Sirio de Liberación, grupos "yihadistas" como el Estado Islámico (ISIS) y Jabhat al-Nusra (JN), así como facciones militares kurdas. Todos comparten el objetivo de derrocar a Assad, pero representan objetivos y motivaciones diferentes.

Las dimensiones sectarias del conflicto se han incrementado con las diferencias entre las sectas musulmanas sunita, chiita y alauita. Los grupos yihadistas sunitas, ISIS en particular, han demostrado su enorme capacidad para movilizar recursos y controlar extensas franjas de territorio, mediante el uso de tácticas brutales. El Observatorio Sirio para los Derechos Humanos calcula que para diciembre de 2014 habían muerto más de 200.000 personas en la guerra, con más de tres millones de refugiados dispersos por la región y más de siete millones de desplazados internos.

Uno de los desarrollos más significativos del conflicto ha sido el surgimiento de áreas que escapan al control del régimen, generalmente conocidas como áreas liberadas. En ausencia del Estado, diferentes actores, armados o no armados, conviven en un mismo espacio donde cooperan, conviven o compiten para llenar un vacío.

Este artículo examina la manera en que los civiles interactúan con los grupos armados, sea mediante canales informales o grupos más organizados de la sociedad civil, y los factores que afectan esta interacción. Se enfoca en aquellas áreas donde la ausencia del régimen ha permitido que ciertos grupos armados surjan como el único poder militar. Se excluyen áreas controladas por las facciones militares

10 Wisam Elhamoui es un activista de la sociedad civil siria que se dedica a las prácticas de emergencia y la transformación del conflicto. Actualmente trabaja en Gaziantep, Turquía, en un proyecto encaminado a empoderar las estructuras locales de gobernanza que están empezando a aparecer en las áreas de Siria no controladas por el régimen. Tiene una Maestría en Desarrollo y Prácticas de Emergencia y ha escrito y colaborado en investigaciones acerca de la crisis en Siria, con énfasis en los ceses al fuego y la prevención del conflicto.

11 Sinan al-Hawat es un investigador residente en Londres, especializado en emergencias complejas y asistencia humanitaria. Tiene una Maestría en Gestión del Desarrollo del London School of Economics and Political Science, así como un posgrado en Estudios Islámicos y Humanidades del Institute of Ismaili Studies de Londres.

kurdas, que rebasan el alcance del artículo. Tampoco se cubren las áreas controladas por el régimen, donde el Estado, aunque debilitado y enfrentado por grupos de autodefensa autónomos locales, todavía controla en gran medida la vida civil, por lo general a través de la fuerza policial y las milicias financiadas por el régimen y leales a él.

El estudio de caso incluye información recabada a partir de entrevistas con activistas en Siria —en las ciudades de Daraa y Homs, y en los distritos damascenos del campamento de Yarmouk y Barzeh— de investigadores que trabajan fuera de Siria, y de la propia experiencia del autor en su trabajo sobre las respuestas humanitarias al conflicto sirio y a favor de la construcción de paz.

La estructura del artículo distingue cuatro campos de relaciones entre los grupos armados y las comunidades, que ayudan a identificar tendencias observables sobre la base de la información disponible, aunque en la realidad es claro que se interrelacionan y se superponen. En primer lugar, el artículo examina la forma en que la organización civil estructurada, que incluye los consejos administrativos de las áreas liberadas, ha establecido relaciones con los grupos armados en algunas instancias. En segundo lugar, explora los contextos en los cuales la organización civil está menos establecida pero donde han surgido modalidades de organización informal para presionar a los grupos armados. En tercer lugar, identifica algunos factores específicos que influyen sobre la interacción entre los civiles y los grupos armados, tales como los lazos personales. Finalmente, reflexiona sobre el impacto de la naturaleza cambiante del conflicto y las variaciones en la tipología de los grupos armados.

> “Muchos grupos de la sociedad civil aprovechan la legitimidad obtenida a través de sus funciones de administración, gobernanza y suministro de servicios para dialogar con los grupos armados.”

Grupos armados, organización civil y legitimidad local

Tras décadas de opresión, el activismo civil surgió en el espacio público sirio en 2011. Al comienzo del levantamiento, los grupos activistas se constituyeron en Comités de Coordinación Local (LCC) como plataformas para movilizar protestas y campañas. A medida que las áreas se liberaban del control por parte del régimen, una multitud de actores, tanto armados como locales, llenaron el vacío de gobernanza resultante. Los grupos armados siguieron combatiendo el régimen y controlando territorio, y le brindaban seguridad y protección a la población. Los actores civiles, incluidos los LCC donde los había, asumieron la responsabilidad de suministrar servicios y proporcionar asistencia y administración.

La intensificación del conflicto armado trajo consigo el desmantelamiento de muchas estructuras civiles; algunas fueron reestructuradas y solo unas pocas sobrevivieron. Tal como lo documentó Rana Khalaf en 2014, la sociedad civil siria ha pasado por muchos cambios y enfrentado muchas limitaciones. Y según el rastreo realizado por Doreen Khoury (Accord 25, 2014), surgieron nuevos grupos de la sociedad civil en las regiones no controladas por el régimen, entre los cuales se destacan los Consejos Administrativos Locales (LAC) que ejercían funciones de gobernanza en las zonas rurales.

Las investigaciones desarrolladas por el Centro para el Diálogo Humanitario y publicadas en 2014 demostraron que la mayoría de las facciones armadas contrarias al régimen sirio reconocían la necesidad de mantener el apoyo popular al levantamiento. Cooperan con los consejos locales y animan su creación, y mantienen un particular interés en su estructura, especialmente respecto de la función de bienestar. Los LAC fueron reconocidos oficialmente por las Coalición Nacional de Fuerzas Revolucionarias y de Oposición Sirias, una coalición de grupos de oposición creada en noviembre de 2012. En 2014, el gobierno de oposición calculaba que había más de 750 LAC en las áreas liberadas.

Muchos grupos de la sociedad civil aprovechan la legitimidad obtenida a través de sus funciones de administración, gobernanza y suministro de servicios para dialogar con los grupos armados. Por ejemplo, desde la llegada de grupos armados a su vecindario en el verano de 2012 —el FSA y el Frente Democrático por

la Liberación de Palestina (DFLP)— los grupos activistas en Yarmouk, Damasco han recurrido a su legado activista para convertirse en un punto de referencia para que los civiles contacten a los grupos armados. De manera similar, en Alepo, algunos activistas civiles atribuyen su buena relación con ciertos grupos armados a la camaradería que los había reunido antes de la rebelión armada, en la época en que el régimen estaba reprimiendo sistemáticamente a los activistas de derechos humanos.

Los LAC han derivado su legitimidad de herramientas básicas de la democracia como la deliberación pública y las elecciones, así como del consenso entre actores influyentes de la comunidad. Con frecuencia, los donantes extranjeros condicionan la financiación de los LAC que suministran servicios y asistencia humanitaria en sus áreas locales a su independencia respecto de todo grupo armado. Uno de nuestros entrevistados señaló que "los grupos armados entienden esto y saben que la población local se va a oponer a ellos si interfieren con el trabajo de los LAC". Los grupos de la sociedad civil que no suministran servicios son más vulnerables a la interferencia por parte de los grupos armados.

En Barzeh, las relaciones que se canalizaron a través del comité del vecindario fueron más efectivas que la interacción directa entre los civiles y las milicias locales del FSA, debido a que dicho comité se había formado mediante un acuerdo entre los grupos armados locales y los civiles locales. Se hallaba liderado por representantes de las *katibas* (unidades de combate) locales y civiles (tales como médicos y abogados), y por ello le fueron otorgadas facultades ejecutivas que todas las partes se comprometieron a respetar. Tal como señalan Turkmani *et al* (2014), el Comité de Reconciliación jugó un papel importante en la representación de los grupos armados locales y los activistas de Barzeh al negociar un cese al fuego con el régimen a comienzos de enero de 2014.

> "A pesar de la escasez de foros para la expresión, la falta de protección y el temor a la retribución, los civiles participan activamente en campañas y movilizaciones para contrarrestar el control de los grupos armados y expresar sus inquietudes."

En Saraqeb, una ciudad predominantemente sunita de 30.000 habitantes en la división administrativa de Idlib, los activistas revolucionarios y los grupos armados colaboraron para formar órganos legislativos y administrativos. Un ejemplo es el Frente Revolucionario, una alianza formada en diciembre de 2013 por brigadas del FSA, que es hoy día unos de los grupos armados locales más fuertes de Saraqeb y ha trabajado con grupos activistas y el LAC para establecer un órgano judicial civil independiente. Se trató de un esfuerzo compartido para limitar los actos de violencia cometidos por las brigadas de seguridad que operaban en el área.

La interacción civil informal con los grupos armados

En muchos casos, la cooperación no es factible y las relaciones entre civiles y grupos armados son más conflictivas. Desde marzo de 2014, el Consejo Islámico para la Administración de las Áreas Liberadas, apoyado por JN, y el Frente Islámico han intentado establecer consejos islámicos locales para oponerse al rol de los LAC independientes.

En áreas dominadas por ISIS, la vida civil (asistencia, educación, justicia y comportamiento en los espacios públicos) se halla estrictamente controlada. A pesar de la escasez de foros para la expresión, la falta de protección y el temor a la retribución, los civiles participan activamente en campañas y movilizaciones para contrarrestar el control de los grupos armados y expresar sus inquietudes. Hay numerosos ejemplos de civiles y activistas que replican, en áreas no controladas por el régimen, las mismas técnicas no violentas que se habían utilizado previamente en contra del régimen, entre ellas protestas, volantes, grafiti o desobediencia.

En la asediada división administrativa de Rif Dimashq, las comunidades están frustradas con el comportamiento de Jaysh al-Islam, el principal grupo armado local. Este grupo, que forma parte del Frente Islámico y está integrado por combatientes locales, surgió en 2011 y se convirtió en el punto de convergencia para varias facciones del área. En protesta contra el acaparamiento

de las reservas de alimentos, las comunidades tomaron por asalto las tiendas de alimentos. En Maaret al-Numan (división administrativa de Idlib), los civiles protestaron en contra de la interferencia de JN en su vida cotidiana, al imponer, por ejemplo, códigos de indumentaria para las mujeres y las niñas de colegio. JN respondió aligerando las restricciones. En otro caso sucedido en Alepo, una activista de alto perfil fue detenida tras negarse a vestir el *hijab* tal como lo exigía el grupo armado local. Una red de activistas se puso en contacto con los organismos políticos y donantes que estaban apoyando y financiando al grupo, y la activista fue dejada en libertad cuando le advirtieron al grupo que podría perder la financiación.

Sin embargo, a pesar de la abundancia de casos de violencia extrema en contra de los civiles por parte de los grupos armados y de los esfuerzos realizados por los activistas civiles para promover su causa, estas historias rara vez suscitan el interés o el apoyo de los activistas internacionales, las organizaciones no gubernamentales internacionales, los donantes o los políticos. El caso de RazanZaytouneh, cofundador de los LCC, es una excepción ya que ha merecido mayor atención. Razan y otros tres activistas civiles fueron secuestrados en Douma (un suburbio oriental de Damasco) en diciembre de 2013 por integrantes de una milicia islamista local y siguen en cautiverio.

Los lazos personales

Los lazos personales, tales como los derivados del parentesco, la filiación tribal y la solidaridad entre amigos y vecinos, desempeñan un papel clave en la manera en que las comunidades se acercan a los grupos armados. El hecho de que los grupos armados y los civiles sean de la misma localidad posee una importancia particular —a menudo fundamental— para su interacción, el aprovechamiento del capital social existente y el fomento del desarrollo de redes para que civiles y grupos armados se tengan mutua confianza y trabajen juntos.

> “Los activistas civiles de Alepo explican que sus buenas relaciones con los grupos armados se desarrollaron a partir de la solidaridad previa a la rebelión armada, cuando el régimen se dedicaba a reprimir sistemáticamente a los activistas de derechos humanos.”

Esto es especialmente cierto en los centros urbanos. El distrito de Barzeh en Damasco, con una población de 50.000, ha padecido un bloqueo por parte del régimen desde la primavera de 2013. La unidad del FSA que controla el área está integrada por combatientes del vecindario y mantiene relaciones positivas con los civiles locales, relaciones que son más significativas que los lazos de sangre; por ello, el FSA se ha mostrado receptivo a la influencia y los intereses de los civiles. La presión ejercida por parte de algunos pobladores de Barzeh que habían sido desplazados a otras partes de Damasco y querían regresar a casa fue la razón principal para que los combatientes del FSA llegaran a un acuerdo de cese al fuego con el ejército sirio en enero de 2014. La afluencia de retornados hizo que el cese al fuego fuera irreversible, dado que cualquier acción militar podría causar un gran número de muertes, así como una nueva crisis de desplazamiento para los habitantes de Barzeh.

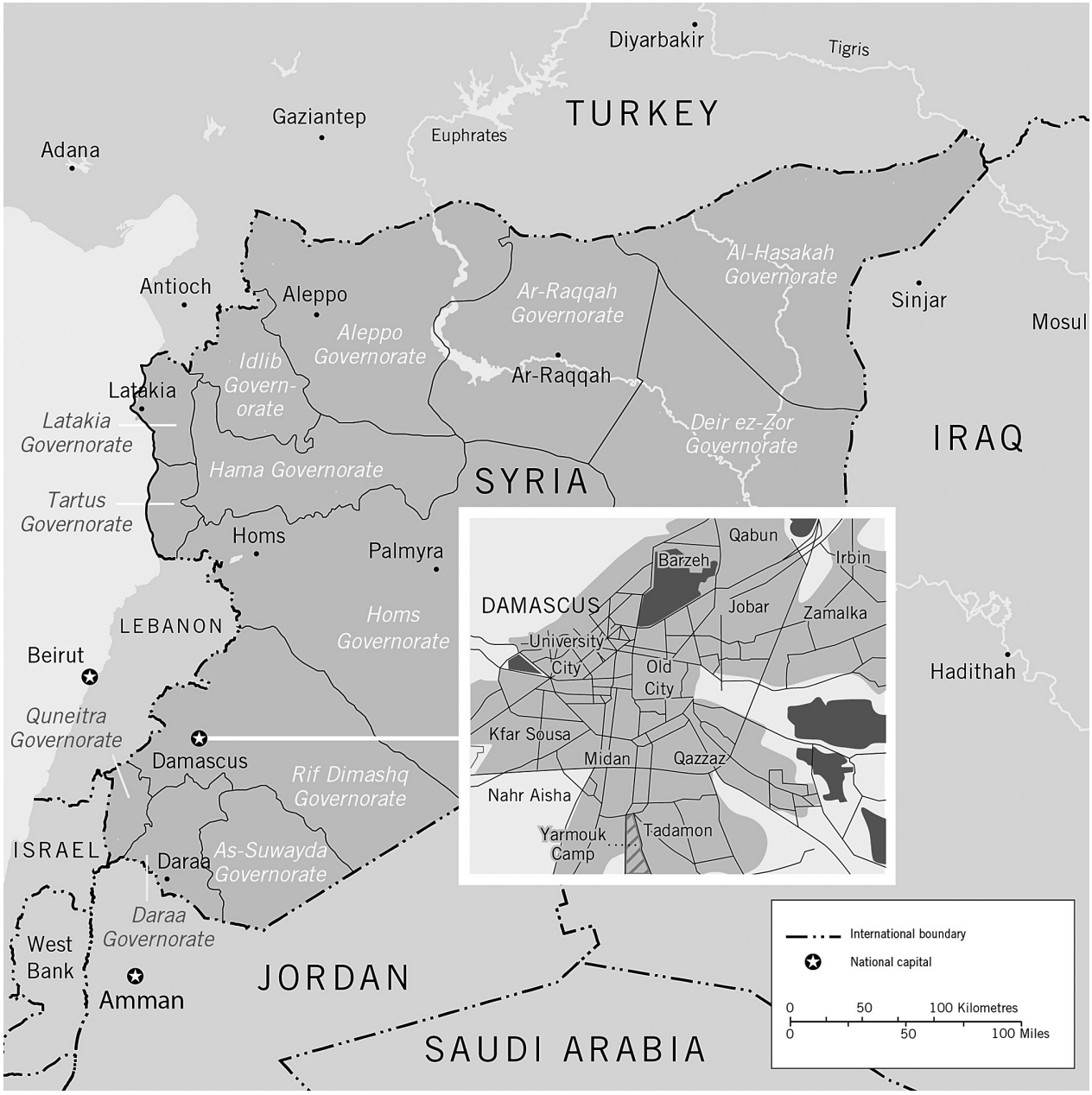
La solidaridad construida a partir de experiencias compartidas durante las fases iniciales del levantamiento armado ayuda a fortalecer los lazos basados en la localidad. Los activistas civiles de Alepo explican que sus buenas relaciones con los grupos armados se desarrollaron a partir de la solidaridad previa a la rebelión armada, cuando el régimen se dedicaba a reprimir sistemáticamente a los activistas de derechos humanos.

Las tribus y las grandes redes familiares en las áreas rurales de Alepo e Idlib se caracterizan por una estructura jerárquica que destaca la importancia de los notables y los líderes sociales y del respeto hacia ellos. También promueven la solidaridad y la cohesión como fundamentales para la supervivencia. Las conexiones tribales se extienden hasta las ciudades. En Homs, uno de los entrevistados explicaba que en las áreas controladas por el FSA, los civiles han tratado de influir sobre la intensidad del combate en su localidad y que, en algunos casos, han impedido que los miembros de su familia combatan en sus áreas.

Las relaciones tribales y de familia han sido relevantes para los LAC

allí donde ese tipo de relaciones se valoran y respetan altamente, como por ejemplo en las comunidades rurales y tribales. La participación de los líderes locales en los LAC desempeña el importante papel de influenciar y, si es del caso, presionar a los grupos armados. En la región rural de Daraa, por ejemplo, las filiaciones tribales de los miembros de los LAC y los consejos consultivos *o shura* se utilizan para influir sobre los grupos armados locales. Este rol no le pertenece solo a los LAC, sino a todo órgano civil que incluya líderes comunitarios, como por ejemplo el Consejo de Sabios en la zona rural de Idlib.

El aspecto negativo de una solidaridad orgánica tal es que las comunidades locales pagan un alto precio por apoyar a su grupo armado local. Después de dos años de sitio militar intenso a Homs, el centro de la ciudad fue destruido por completo y más de 2.200 ciudadanos perdieron la vida. Cuando los derrotados combatientes del FSA y las brigadas islámicas aceptaron retirarse del distrito Bab 'Amr de Homs en junio de 2014, la mayoría de los civiles abandonaron la ciudad por temor a represalias por parte del ejército.



También es posible que en los contextos de conflicto surjan agendas personales que compiten entre sí, las cuales pueden socavar las estructuras sociales y culturales que apuntalan la cohesión comunitaria. En Barzeh, uno de los entrevistados señalaba que los combatientes analfabetos encuentran en la guerra la oportunidad de obtener influencia y respeto, a la vez que se ganan la vida. El estar armados les otorga un poder que no tendrían de otra manera. Esto debilita la influencia de las relaciones personales y las relaciones de parentesco. En Manbij, en la división administrativa de Alepo, las facciones armadas de fuera de la región acusaron al consejo local de apoyar al régimen, lo cual hizo que perdiera su legitimidad, y luego aprovecharon la oportunidad para reemplazarlo con un sumiso comité de *Sharia* (leyes islámicas) en noviembre de 2013.

Las prioridades estratégicas de los grupos armados en lo que respecta al conflicto también pueden disminuir la influencia de las relaciones personales. Cuando los militantes gozan de la ventaja militar, los lazos personales quedan reemplazados por la necesidad militar. En el largo plazo, esto perjudica los vínculos sociales que anteriormente le permitían a los civiles resistir o apoyar a los grupos de oposición. Varios entrevistados explicaban que en los períodos de tregua, los comités civiles de vecindario, integrados por individuos muy respetados, lograron incidir sobre las decisiones de la milicia, a través de los líderes tradicionales o de autoridades elegidas *ad hoc.* Sin embargo, en los periodos de intenso combate, las acciones de los grupos armados se hallan determinadas por las prioridades del conflicto.

La interacción de los civiles y la naturaleza cambiante de los grupos armados sirios

El movimiento armado en Siria comenzó con pequeños grupos locales poco organizados, integrados en gran medida por combatientes locales, que dependían del apoyo de las comunidades. La intensificación del combate y la necesidad de que los grupos armados fortalecieran sus capacidades para poder resistir al régimen o adquirir y controlar territorio generó la demanda de formaciones de combate más grandes y más organizadas. La disponibilidad de recursos, el acceso a financiación y armas y la claridad de la organización y la cadena de mando desempeñaron papeles esenciales en la creación de los grupos armados más grandes que existen actualmente.

La claridad respecto de los objetivos militares, la visión política o la "ideología" afectan la coherencia y la organización de los grupos armados, su capacidad para movilizarse y reclutar individuos afines y su legitimidad entre quienes habitan los territorios que ellos pretenden liberar del dominio del régimen. Los grupos que no adoptaron un programa político no pudieron conseguir financiación extranjera destinada ya sea a los grupos "democráticos" (prooccidentales) o a los "islamistas", respectivamente, y por ende, carecían de los recursos para lograr un avance militar. El discurso de la democracia, la ciudadanía y el Estado de derecho defendido por algunos de los grupos armados vinculados al FSA en las etapas iniciales del levantamiento sirio se debilitó rápidamente a raíz de la inacción de las potencias occidentales y la interferencia de los Estados regionales que perseguían sus propios intereses geopolíticos.

En 2015, la ideología "islamista" era el dogma prevalente entre los grupos armados en Siria. Entre los grupos y formaciones armados principales que actualmente se oponen al régimen se encuentran JN, Jaysh al-Islam, al-Jabha al-Shamia, Jaysh al-Mujahideen e ISIS. Todos estos grupos dicen estar guiados por variantes específicas del islamismo (sunita). Con frecuencia tratan de imponerles sus convicciones a las comunidades circundantes, recurriendo incluso a tribunales y comités religiosos. La reacción de los civiles varía dependiendo del contexto, pero las comunidades que intentan influir sobre los grupos armados hacen referencia al mismo corpus religioso con el fin de objetar o rechazar el fallo de una corte o comité. Por ejemplo, una comunidad en la zona rural de Idlib, enfurecida ante la lapidación por parte de JN de una mujer acusada de cometer adulterio, a finales de 2014, recurrió a fuentes religiosas para presentar "evidencia" de que la lapidación era "anti-islámica". Uno de los entrevistados, contrario a la posición de JN, comentó: "nos toca utilizar el mismo lenguaje que ellos [JN]".

Muchos creen que no es posible desafiar las ideologías por fuera de este marco. Los grupos como ISIS y JN imponen una implementación radical y excluyente de la *Sharia* en las ciudades y regiones que controlan, tales como las divisiones administrativas de Ar-Raqqah y Deirez-Zor. Inclusive algunos activistas de derechos humanos y laicos han recurrido a argumentos de la misma ideología, aunque esto puede resultar problemático dado que limita la capacidad de contradecir o condenar las violaciones o imposiciones perpetradas por los grupos armados.

Inevitablemente, es menos probable que los grupos armados que han adoptado la ideología islamista le rindan cuentas a la comunidad. Un activista de Yarmouk citaba una respuesta que le había dado un grupo armado local: "Nuestro papel es el de propagar la palabra de Dios. Esto vale más que la vida humana." El activista tuvo que abandonar Yarmouk para escapar a la persecución.

La mayor parte de las comunidades no sunitas que viven en áreas controladas por los grupos islamistas han sufrido un trato muy severo. Por ejemplo, en enero de 2015, un emir perteneciente a JN ordenó a las comunidades de la minoría religiosa drusa de 14 pueblos cerca de Idlib que demolieran sus templos y renunciaran a su fe. Por lo general, los civiles de estas comunidades carecen de la capacidad para dialogar con los grupos armados islamistas, lo cual lleva con frecuencia a su propio desplazamiento o a lesiones físicas. De manera similar, los activistas que no están de acuerdo con las posiciones de los grupos armados islamistas, como por ejemplo los abiertamente laicos o los que están a favor de la libertad y la democracia, también se han visto obligados a huir.

Conclusión

A medida que el mapa del conflicto en Siria se torna más complejo, sería erróneo asumir que los civiles siempre tienen la capacidad de lograr que los grupos armados dialoguen, o de resistirse ante sus exigencias. Es indudable que frente a la violencia extrema y sostenida, las poblaciones sirias han luchado para afirmar su protagonismo respecto de la construcción de la paz, con el fin de incidir sobre la dinámica del conflicto y el comportamiento de los actores armados.

El parentesco y las relaciones locales y sociales han seguido siendo los canales más significativos. Los activistas de la sociedad civil también han establecido relaciones influyentes con algunos grupos armados debido a que anteriormente habían organizado conjuntamente y participado en protestas en contra del régimen. Esto los ayuda a mediar entre los civiles y los grupos armados. A nivel político, los activistas han participado también en varios acuerdos locales de cese al fuego celebrados entre los grupos anti-régimen y las fuerzas del régimen.

El éxito de las tácticas de resistencia no violenta, utilizadas en contra del régimen, como las protestas, las campañas y la desobediencia civil generalizada, y adaptadas para cercarse a los grupos armados, ha sido desigual. Las relaciones entre las comunidades y los grupos armados islamistas son especialmente complicadas y en la mayoría de los casos, los civiles no cuentan con argumentos fuertes para negociar sus posiciones en contra de los fallos basados en la *Sharia.* También es importante contribuir a los esfuerzos de paz de los civiles ejerciendo presión sobre los Estados y donantes que apoyan a los grupos armados sirios para que, a su vez, convenzan a los grupos de no seguir usurpando el espacio civil.

Hoy, cuando el conflicto sirio alcanza su quinto año, es importante no perder de vista los papeles significativos desempeñados por los actores no armados y no estatales para desarrollar estructuras que promuevan la seguridad y la paz locales, y para adaptarse a las exigencias siempre cambiantes del conflicto. Los activistas y habitantes locales han realizado enormes esfuerzos para que se escuche la voz de los civiles. Han demostrado resiliencia y una increíble capacidad de mantener sus esfuerzos y aspiraciones a pesar de los monumentales retos y la falta de apoyo.

Textos clave

Generales

15 octubre 1999. UNSCR 1267 establishing a sanctions regime to cover individuals and entities associated with Al-Qaida, Osama bin Laden and/or the Taliban wherever located www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1267(1999)

21 junio 2010. The US Supreme Court ruling of Holder v Humanitarian Law Project www.supremecourt.gov/opinions/09pdf/08-1498.pdf

25 junio 2012. UN Secretary-General's Report A/66/811, Strengthening the role of mediation in the peaceful settlement of disputes, conflict prevention and resolution www.goo.gl/10TqKj

Irlanda del Norte

7 abril 1922. Civil Authorities (Special Powers) Act (Northern Ireland) 1922 www.goo.gl/JHeDwA

10 abril 1998. The Belfast Agreement www.gov.uk/government/publications/the-belfast-agreement

Región Norte de Uganda

17 enero 2000. Government of Uganda, The Amnesty Act, 2000 www.goo.gl/PSens6

2006-2008. Agenda items of the Juba talks between the Government of Uganda (GoU) and the Lord's Resistance Army (LRA) www.beyondjuba.org/BJP1/peace_agreements.php

5 noviembre 2008. Declaration of the Stakeholders' Consultation on the Juba Peace Process, Munyonyo, Kampala www.goo.gl/Icrb6m

26 marzo 2015 (updated). Case information sheet for ICC-02/04-01/05: The Prosecutor v. Joseph Kony, Vincent Otti and OkotOdhiambo www.goo.gl/zs9OOk

Lecturas adicionales

Generales

Arjona, Ana. Civilian resistance to rebel governance. Households in Conflict Network Working Paper 170, Febrero 2014.

Berghof Peace Support and Conciliation Resources. Mediating peace with proscribed armed groups: Policy workshop report on the implications of European Union (EU) counter-terrorism legislation for mediation and support for peace processes, 2011.

Conciliation Resources. *Accord 25:* Legitimacy and peace processes: from coercion to consent (London: Conciliation Resources, 2014).

Conciliation Resources. *Accord 22:* Paix sans frontières: building peace across borders (London: Conciliation Resources, 2011).

Conciliation Resources. Accord Insight II: Local civil society engagement of non-state armed groups. Joint analysis workshop report, London, Noviembre 2013.

Conciliation Resources. *Accord 16: Choosing to engage: Armed groups and peace processes.* (London: Conciliation Resources, 2005).

Conciliation Resources. Engaging armed groups in peace processes. Joint analysis workshop report, London, July 2004.

DCAF & Geneva Call. Armed non-state actors: Current trends & future challenges. DCAF Horizon 2015 Working Paper No. 5, 2011.

De Goede, Mereike. 'Blacklisting and the ban: Contesting targeted sanctions in Europe', Security Dialogue Vol. 42, 2011: 499.

Dudouet, Véronique, Hans J. Giessmann y Katrin Planta. From combatants to peacebuilders: A case for inclusive, participatory and holistic security transitions. Policy Report, Berghof Foundation, 2012.

Dudouet, Véronique. From war to politics: *Resistance/liberation movements in transition* (Berlin: Berghof Foundation, 2009).

Forced Migration Review No. 37: Armed non-state actors and displacement, Marzo 2011.

Geneva Academy of International Humanitarian Law and Human Rights. *Rules of engagement: Protecting civilians through dialogue with non-state actors* (Geneva: Geneva Academy of International Humanitarian Law and Human Rights, 2011).

Hancock, Landon E. y Christopher R. Mitchell (eds). *Zones of peace* (Bloomfield: Kumarian Press, 2007).

Hofmann, Claudia y Ulrich Schneckener. 'Engaging non-state armed actors in state- and peace-building: options and strategies', *International Review of the Red Cross* Vol. 93 No. 883, Septiembre 2011.

Jackson, Ashley y Antonio Giustozzi. Talking to the other side: Humanitarian engagement with the Taliban in Afghanistan. HPG Working Paper, Diciembre 2012.

Mampilly, Zachariah Cherian. *Rebel rulers: Insurgent governance and civilian life during war* (Ithaca and London: Cornell University Press, 2011).

Manningham-Buller, Eliza. The Reith Lectures (BBC, 2011).

Mason, Simon. *Insider mediators: Exploring their key role in informal peace processes* (Berghof Foundation for Peace Support, 2009).

Mitchell, Christopher R. y Landon E. Hancock (eds). *Local peacebuilding and national peace: Interaction between grassroots and elite processes* (London and New York: Continuum, 2012).

Powell, Jonathan. T*alking to terrorists: How to end armed conflicts* (London: The Bodley Head, 2014).

Soliman M. Santos, Jr. y Paz Verdades M. Santos. *Primed and purposeful: Armed groups and human security efforts in the Philippines* (Small Arms Survey, 2010).

Staniland, Paul. *Networks of rebellion: Explaining insurgent cohesion and collapse* (Ithaca and London: Cornell University Press, 2014).

Whitfield, Teresa. *Endgame for ETA: Elusive peace in the Basque Country* (London: Hurst, 2014).

Whitfield, Teresa. Engaging with armed groups: Dilemmas & options for mediators. Mediation Practice Series, Humanitarian Dialogue, Octubre 2010.

Zartman, I. William y Guy Olivier Faure (eds). *Engaging extremists: Trade-offs, timing and diplomacy* (Washington: United States Institute of Peace, 2011).

Colombia

Caraballo Acuña, Vladimir. 'Desminado social y comunitario de Micoahumado. Soberanías en vilo y relaciones previas a la negociación', en Sarmiento Santander F., (ed) *Lecciones para la paz negociada: Retrospectiva histórica en Colombia* (Colombia: CINEP/PPP, 2011) 209–223.

Conciliation Resources. *Accord 14: Alternatives to war: Colombia's peace processes* (London: Conciliation Resources, 2004).

Geneva Call. 'Caso de Micoahumado' en Experiencias de Desminado y Limpieza de Territorios en Colombia, 2011: 3–9, en www.genevacall.org/wp-content/uploads/dlm_uploads/2013/12/experencias.pdf

Hernández Delgado, Esperanza. 'Experiencia de la Asamblea Popular Constituyente de Micoahumado' en Esperanza Hernández Delgado, Intervenir antes que anochezca: Mediaciones, *intermediaciones y diplomacias no violentas de base social en el conflicto armado colombiano* (Bucaramanga: Universidad Autónoma, 2012).

Mitchell, Christopher y Sara Ramírez. 'Local peace communities in Colombia: An initial comparison of three cases', in Virginia M. Bouvier (ed), *Colombia: Building peace in time of war*, Washington, DC: United States Institute of Peace, 2009: 245–270.

Reusse-Decrey, Elisabeth. 'The struggle against landmines an opening for peace talks in Colombia', en Conciliation Resources, *Accord 16: Choosing to engage: Armed groups and peace processes* (London: Conciliation Resources, 2005).

Sjöberg, Ann-Kristin. Dealing with the Devil? Humanitarian engagement with armed non-state actors: The case of the National Liberation Army. Paper prepared for the Annual Convention of the International Studies Association San Francisco, 26–29 Marzo 2008, Graduate Institute of International and Development Studies (HEID) Geneva, Switzerland.

Valencia, León. 'The ELN's halting moves towards peace', en Virginia M. Bouvier (ed), *Colombia: Building peace in time of war. Washington,* DC: United States Institute of Peace, 2009: 95–110.

LRA

Afako, Barney. Pursuing peace in northern Uganda: Lessons from peace initiatives. Commissioned by Civil Society Organizations for Peace in Northern Uganda, 2003

Allen, Tim y Koen Vlassenroot (eds). *The Lord's Resistance Army: Myth and reality* (London: Zed Press, 2010)

Baines, Erin y Emily Paddon. 'This is how we survived: Civilian agency and humanitarian protection', *Security Dialogue* 43, 2012: 231

Conciliation Resources. Accord 11: Protracted conflict, elusive peace: *Initiatives to end the violence in northern Uganda.* (London: Conciliation Resources, 2002)

Conciliation Resources. 'Regional community peacebuilding and the LRA conflict: A conversation with John Baptist Odama, Archbishop of Gulu, Uganda', en *Accord 22: Paix sans frontiéres: building peace across borders* (London: Conciliation Resources, 2011)

Conciliation Resources. Accord 11 (update): *Initiatives to end the violence in northern Uganda: 2002-09 and the Juba peace process,* (London: Conciliation Resources, 2010)

Human Rights and Peace Centre (HURIPEC) y Liu Institute for Global Studies, The Hidden War, the Forgotten People: War in Acholiland and its Ramifications for Peace and Security in Uganda. 2003

Ibrahim, Maggie. 'Rebel voices and radio actors: in pursuit of dialogue and debate in northern Uganda', *Development in Practice* Vol. 19, No. 4–5, 2009

Rodriguez Soto, Carlos. Tall grass: *Stories of suffering and peace in Northern Uganda* (Fountain Publishers, 2009)

Royo, Josep Maria. War and peace scenarios in northern Uganda, Escola de Cultura de Pau, Julio 2008

Schomerus, Mareike and Kennedy Tumutegyereize. After Operation Lightning Thunder: Protecting communities and building peace. (London: Conciliation Resources, 2009)

Siria

Integrity Research and Consultancy. Local truces in Syria. Junio 2014

Khalaf, Rana, Oula Ramadan y FriederikeStolleis. Activism in difficult times: Civil society groups in Syria 2011–2014. Badael Project y Friedrich-Ebert-Stiftung, 2014

Khoury, Doreen. 'Syria: Organising for the future: grassroots governance and national peace', en Conciliation Resources, *Accord 25: Legitimacy and peace processes* (London: Conciliation Resources, 2014)

Ministry of Foreign Affairs of Denmark. *Local administration structures in opposition-held areas in Syria,* Geneva: Centre for Humanitarian dialogue, Abril 2014.

Turkmani, Rim, Mary Kaldor, WisamElhamwi, Joan Ayo and Nael Hariri. *Hungry for peace: Positives and pitfalls of local ceasefires in Syria.* London: Madani and London School of Economics, 2014

Sitios web clave

Acholi Religious Leaders Peace Initiative

www.arlpi.org

Beyond Juba

www.beyondjuba.org

Berghof Transitions Series

www.berghof-foundation.org/publications/transitions-series

CINEP/ Programa por la Paz

www.cinep.org.co

www.cinep.org.co/publicaciones

Committee on the Administration of Justice

www.caj.org.uk

Geneva Call

www.genevacall.org/country-page/colombia

NIACRO

www.niacro.co.uk

Northern Ireland Alternatives

www.alternativesrj.org

Security in Transition

www.securityintransition.org

Esta publicación hace parte de

Colección

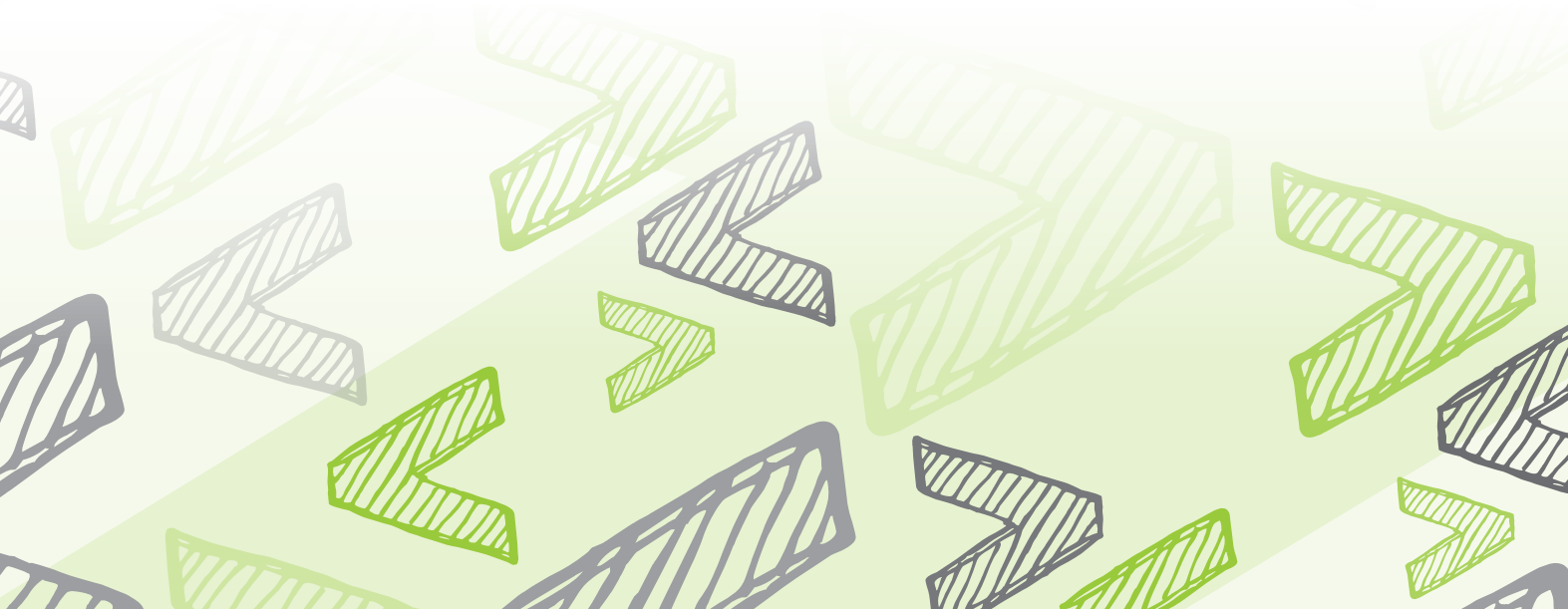
Papeles de paz

Otros números que hacen parte de esta colección:

1. De El Salvador a Colombia: seis pistas para la paz.
2. Ni canto de gloria ni canto fúnebre. El regreso del EPL a la vida civil.
3. Informe de la Comisión Verificadora de los Actores Violentos en Urabá. El destino de la frontera - Urabá en los años 90.
4. Los bancos de datos: Sistematización en derechos humanos.
5. La violencia llamada limpieza social.
6. La paz en Colombia, aportes desde la región, conversatorios sobre el nororiente.
7. Al lado de la gente. Acompañamiento a comunidades en medio del conflicto armado.
8. Condiciones para la negociación.
9. Renunciar a la opción armada. Experiencias de reintegración política de grupos insurgentes en Colombia y El Salvador.
10. Reconciliación. Perspectivas y aportes conceptuales para su comprensión

Diálogos locales

Con grupos armados en medio de la violencia



Colección

Papeles de paz

11

Diálogos locales

Con grupos armados en medio de la violencia

Esta segunda publicación Accord Insight explora la forma en que los actores locales se organizan para entablar un diálogo con los grupos armados y cuestionar su recurso a la violencia. La publicación aprovecha los hallazgos del Accord 16 (2005), *Opciones de compromiso: acercamientos con grupos armados en procesos de paz.* Los estudios de caso de Siria, Colombia, el norte de Uganda e Irlanda del Norte documentan las experiencias de comunidades que han optado por acercarse a los grupos armados –a menudo antes de que se produjeran negociaciones más formales y en situaciones de intensa violencia y conflicto arraigado– y examinan por qué y cómo interactúan, así como los retos que esto implica.

Los estudios de caso destacan tanto los riesgos que asumen las comunidades como la resiliencia y la innovación requeridas cuando se trata de incidir sobre unos grupos armados empeñados en la violencia. Ilustran la forma en que la participación activa de las comunidades contribuye de manera significativa no sólo a la seguridad humana local y la construcción de paz, sino también a la transformación de los grupos armados.

cinep | programa por la paz

CONCILIATION RESOURCES
working together for peace

Con el apoyo de:

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
cooperación española

H+D
FUNDACIÓN HUMANISMO Y DEMOCRACIA